

# El Militante



CORRIENTE MARXISTA REVOLUCIONARIA

Donación: 1,50 euros  
Ayuda: 2 euros

Núm. 267 • ENERO • 2013

**2012**  
Doce meses de un  
**GOBIERNO INFAME**

**2013**

**Continuar  
la lucha  
hasta  
tumbar  
al PP**

► páginas centrales

**5, 6 y 7 de febrero**  
**HUELGA GENERAL ESTUDIANTIL**

► contraportada y pág. 11



# La enfermedad de Chávez y el futuro de la revolución venezolana

Corriente Marxista Revolucionaria  
Venezuela

El 18 de diciembre de 2012 Hugo Chávez anunciaba que debía someterse a una nueva y complicadísima operación al haberse reproducido el cáncer del que ya había sido intervenido con anterioridad. Chávez designó al actual vicepresidente, Nicolás Maduro, para que en caso de quedar inhabilitado como consecuencia de la operación, se situara al frente de la presidencia hasta que se llamara a nuevas elecciones presidenciales y fuera también el candidato del PSUV. Mientras redactamos estas líneas Chávez sufre una insuficiencia respiratoria causada por una infección postoperatoria y lucha por recuperarse. Según el comunicado oficial del gobierno se trata de un proceso “complejo” y “no exento de riesgos”.

## ¿Cómo defender y completar la revolución?

El agravamiento de la enfermedad del presidente Chávez pone sobre la mesa una vez más el tema de cómo hacer avanzar la revolución ante este nuevo obstáculo. El comandante Chávez es una figura central en el proceso revolucionario venezolano. La intensa y permanente campaña de odio orquestada por el imperialismo a escala mundial contra él en la última década no es casualidad. Chávez representa las profundas aspiraciones de cambio de las masas venezolanas. La inmensa mayoría de la población lo votó en 1998, y en todas las ocasiones posteriores, para propiciar una ruptura con la política de privatizaciones y sumisión al capital financiero practicada por los gobiernos anteriores, y por una transformación social profunda. Todos los intentos del imperialismo de acabar con Chávez, como el golpe de Estado de 2002, el sabotaje petrolero y un sinnúmero de maniobras, fueron respondidos con la acción de las masas que, basándose de su propia experiencia en todos estos acontecimientos, han sacado conclusiones políticas cada vez más avanzadas y revolucionarias. El propio pre-



sidente ha reconocido en numerosas ocasiones que su poder reside en el apoyo y la movilización de los trabajadores y oprimidos venezolanos. Además, Hugo Chávez tuvo el enorme mérito de haber señalado años atrás —y fue el primer dirigente de la izquierda que lo hizo tras la caída del estalinismo— que el socialismo es la única salida para la humanidad y para Venezuela. Solo por ello, se ha ganado el reconocimiento del pueblo y los revolucionarios.

Es obvio que tanto el imperialismo como la oligarquía venezolana tratan de explotar de forma contrarrevolucionaria la enfermedad de Chávez y su posible salida de la presidencia. En todo caso, ese escenario abre una etapa en la revolución en la que las fuerzas de clase antagónicas se van a mostrar de un modo más claro y abierto. La lucha entre la clase obrera y la burguesía se va a evidenciar de un modo más fuerte que nunca y, como reflejo de ello, el combate entre los sectores de la burocracia reformista, que quieren mantener a Venezuela en los límites del sistema capitalista, y los que aspiran a completar la revolución dentro del movimiento bolivariano. Durante los últimos días ya hemos visto como los capitalistas intentan desestabilizar y presionar al gobierno amenazando con problemas de desabastecimiento y exigiendo la flexibilización de

lo que ellos llaman “intervencionismo” y “dirigismo” estatal.

La única salida para derrotar cualquier plan contrarrevolucionario pasa por llevar la revolución socialista hasta el final. Esto sólo puede hacerlo la clase obrera, por el papel que juega en el proceso productivo, agrupando a los sectores populares, desempleados y pobres del país.

La reacción de derechas tratará de utilizar en su favor la incertidumbre hacia el futuro y las dudas sobre la viabilidad de la revolución para desmoralizar a un sector de las masas y crear las condiciones para propiciar un cambio contrarrevolucionario en el país. La mejor garantía para contrarrestar esta ofensiva y garantizar la fortaleza y la acción unitaria de las masas, que han sido decisivas en todos los momentos clave de la revolución, es basarse en ese movimiento e impulsar medidas claras, urgentes y concretas desde el gobierno que empujen la revolución hacia delante: expropiando a los capitalistas, nacionales y extranjeros, y desarrollando el estado comunal, la democracia obrera, para terminar con el Estado burgués. Es decir, cumpliendo las expectativas que la revolución ha despertado en las masas y que hasta el momento no se han realizado en lo fundamental.

Tampoco hay que olvidar que la principal amenaza para la unidad del movimiento

revolucionario, y para socavar el legado del comandante Chávez, proviene de los atropellos que la burocracia “bolivariana” comete cada día contra los trabajadores, de su intento de buscar pactos con la derecha, hacerle concesiones a ésta, desviar la revolución en líneas socialdemócratas y plegarse a un sector del imperialismo.

Las recientes elecciones regionales del 16 de diciembre, producidas poco después de la nueva operación de Chávez, confirman —una vez más, y como ya lo hicieron las presidenciales del 7 de octubre— que las masas en Venezuela siguen dispuestas a defender y completar la revolución. Con una participación mucho menor, la diferencia entre el chavismo y la oposición se mantiene e incluso aumenta: de 23 gobernaciones en disputa, el PSUV gana 20, destacando las victorias en los estados fronterizos donde durante los últimos ocho años ha gobernado la oposición de derechas (Zulia y Táchira), y que ésta consideraba feudos seguros desde los cuales poder organizar el asalto al poder.

Esta misma voluntad de lucha de las masas se ha evidenciado en las decenas de miles de actos masivos (homenajes, misas y oraciones espontáneas en plazas y calles) expresando el apoyo del pueblo trabajador al Presidente, así como en el rechazo masivo que han suscitado las maniobras de la oposición contrarrevolucionaria que, con el desprecio por la vida humana que la caracteriza, y en una situación como la que se está viviendo, se dedica a insistir una y otra vez en que si Chávez no está recuperado el 10 de enero para tomar posesión debe abandonar la presidencia.

La clase obrera tiene la tarea de tomar el testigo del comandante Chávez para encabezar la revolución. En manos de Nicolás Maduro, si al final es elegido candidato y posteriormente presidente, estará la responsabilidad de defender la revolución frente a una más que probable ofensiva de la contrarrevolución. Para ello es imprescindible una política revolucionaria que lleve a cabo la nacionalización de la banca y las principales empresas bajo control obrero, y que sustituya el actual estado —que sigue siendo, en esencia, capitalista— por un estado socialista basado en el poder democrático de los trabajadores y el pueblo. Los trabajadores debemos organizarnos dentro del PSUV y en la base del movimiento revolucionario para llevar este programa a la práctica.

## Ola de huelgas en Túnez contra el Gobierno

Ulises Benito

**Una ola de movilizaciones y huelgas está recorriendo los últimos meses del país, con reivindicaciones tanto económicas y sociales como políticas. La continuidad del gobierno de predominio islamista está en entredicho, y muy posiblemente hubiera tenido que dimitir si en el último momento la dirección nacional de la Unión General del Trabajo de Túnez (UGTT) no hubiera desconvocado la huelga general del 13 de diciembre.**

El Gobierno (una coalición de liberales burgueses, socialdemócratas e islamistas) no ha podido ofrecer ninguna solución a los graves problemas que llevaron al derrocamiento del dictador Ben Alí, intentando suplirlo con la represión. Las fuerzas de choque son las mal llamadas Ligas para la Protección de la Revolución, bandas integristas vinculadas al partido gubernamental En Nahda. Estos elementos asaltaron bajo total impunidad, el 3 de septiembre, la sede central de la UGTT. Y el 4 de diciembre cientos de ellos atacaron con palos, navajas y espadas una concentración de la Unión en recuerdo del asesinato de su fundador; ante la pasivi-

dad de la policía, intentaron realizar varios linchamientos. Finalmente ésta reprimió la concentración con disparos de perdigones. Hubo unos doscientos cincuenta heridos. Este nuevo ataque produjo una oleada de indignación y de huelgas de norte a sur y llevó a la convocatoria de huelga general para el 13, la que hubiera sido la tercera en toda la historia del país.

Los integristas detrás de esas bandas de lumpenes pretenden disciplinar al movimiento obrero, y en particular la lucha en Silianna, población que se ha convertido en la punta de lanza. Desde la última semana de noviembre las masas de esta ciudad de doscientos mil habitantes se apoderaron de las calles, exigiendo medidas contra el paro (oficialmente, del 26%, nueve puntos por encima del dato a nivel nacional), inversiones en esta zona olvidada, y la dimisión del gobernador por la extrema represión (hubo unos trescientos heridos). En vez de extender la movilización, los dirigentes de la UGTT pactaron con el gobierno la destitución del gobernador, llamando a los huelguistas a la vuelta al trabajo. Sin embargo, el intento de esta dirección conciliadora saltó por los aires con el brutal ataque del pasado día 4. Parece claro que la clase dominante (o un sector de ella) se precipitó alentando o per-

mitiendo esta agresión, porque la baza fundamental para sus planes (retomar el control total de la situación poco a poco y ahogar la revolución) es basarse en la dirección sindical, sin cuya aquiescencia el gobierno duraría muy poco. La prueba es que tras la agresión del 4 la consigna de *Dégage!* (*¡Vete!*), que retrotrae a las manifestaciones contra Ben Alí, fuera reproducido por miles de gargantas, refiriéndose a Hamadi Jebali, el primer ministro islamista, y que las secciones de la UGTT en algunas de las provincias con más peso obrero y tradición revolucionaria (Sfax, Kasserin, Toser y Sidi Busid), sin esperar a las instrucciones de la dirección, convocaran de forma inmediata huelga general en esas provincias. Huelga que fue exitosa en cada caso. En la ciudad obrera de Sfax hubo una manifestación de 60.000 personas.

Intentando ganar tiempo, los dirigentes de la UGTT, tras algunas vacilaciones, pusieron la fecha del 13 de diciembre para la huelga general nacional. Sin embargo, una vez más, salvó la cara del gobierno, desconvocándola la víspera. El acuerdo que llevó a la convocatoria incluye: el reconocimiento de los derechos de asociación, sindicación, manifestación, etc.; la denuncia de “toda violencia”; la condena del ataque del

día 4; y la creación de una comisión mixta para investigar a las Ligas, y proponer medidas al presidente en un plazo de un mes. Un acuerdo que supone una burla al movimiento, escamoteando la desarticulación inmediata de las Ligas u otras bandas integristas, y la misma dimisión del gobierno, reivindicación absolutamente asumida en la calle (el propio presidente de la República ha tenido que pedir a Jebali que rehaga el gobierno con “tecnócratas”). El secretario general de la UGTT, Hasin Abasi, se justificaba argumentando la “necesidad de preservar la seguridad del país y de evitar los peligros que puedan amenazar su estabilidad”.

Más que nunca, es imprescindible organizar la extensa oposición interna en la UGTT en una corriente combativa, que se dote de un programa socialista, anticapitalista. Es clave para el futuro de la revolución luchar por poner esta organización tradicional, de una enorme fuerza (dice contar con la afiliación de casi la mitad de la población), al servicio de los intereses de las masas oprimidas. Intereses que pasan por la caída del gobierno actual y por fomentar desde cada sección del sindicato estructuras de poder obrero capaces de sustituir al caduco poder burgués.

Ulises Benito

**L**a Revolución Árabe, a la que tantos interesados consideraban acabada, o al menos domesticada, continúa con más brío en el país clave, Egipto. Las manifestaciones masivas, las acampadas, los lemas revolucionarios, han vuelto con una enorme fuerza contra el gobierno contrarrevolucionario de Mohamed Mursi. Los acontecimientos actuales suponen el inicio de una fase superior de la revolución.

Aunque la movilización de las masas egipcias no ha parado en ningún momento (y en especial el movimiento huelguístico), las últimas decisiones de Mohamed Mursi, el presidente islamista, han echado a la calle a los mismos protagonistas del levantamiento que acabó con la dictadura de Mubarak. El motivo inmediato, el decreto presidencial que pretendía blindar sus decisiones futuras frente a cualquier otra instancia; un paso más hacia la concentración de poder en un personaje que, seis meses después de su elección, ha demostrado sobradamente a quién sirve. El islamismo, como en otros procesos revolucionarios (el iraní de 1979), pretende secuestrar la bandera de la revolución para asestarle una puñalada mortal. Es, en estos momentos, la mayor garantía que tiene la clase dominante egipcia (y el imperialismo) de que nada cambie realmente; una garantía que evidentemente no es total ni mucho menos, ya que la revolución dista mucho de estar derrotada y la maniobra contrarrevolucionaria es evidente para un sector importante de la población, determinada a movilizarse ante el peligro que amenaza.

Desde la última semana de noviembre la lona de las tiendas ha vuelto a la plaza Tahrir, de igual forma que las consignas contra el régimen y para echar abajo el dictador. Una enorme pancarta preside la plaza, indicando que “Se prohíbe la entrada a los Hermanos Musulmanes” (la organización de Mursi). También han vuelto las manifestaciones de millones de personas, en El Cairo, Alejandría y el resto de ciudades. En Alejandría fue ocupado el Consejo Local (ayuntamiento), al grito de “El poder es nuestro”.

La represión no ha vuelto... porque nunca se fue. Ahora bien, esta vez los brutales ataques a los manifestantes, que han provocado al menos nueve muertos, han sido en gran parte a cargo de las bandas de lumpenes integristas de la Hermandad Musulmana. El 5 de diciembre estos fascistas mataron a seis manifestantes y provocaron cientos de heridos. El Ejército se ha mantenido en un segundo plano. De hecho, de igual forma que en el levantamiento que acabó con el poder de Mubarak, ha habido escenas de confraternización con soldados. El 7 de diciembre la manifestación rompió sin violencia el cordón de seguridad alrededor del palacio presidencial (alambradas y barricadas), ante la pasividad de las tropas, y algunos soldados subieron a los tanques a saludar a los revolucionarios, mientras éstos gritaban la tradicional consigna “soldados y pueblo, una sola mano”.

La actitud militar tiene dos causas que se alimentan. Por un lado, la simpatía que despierta la lucha en un sector importante de la tropa. Por otro, los intereses de la oficialidad que, aliada al gobierno islamista en su intento de frenar la revolución, trata de no ponerse en el punto de mira de los manifestantes e incluso utilizar la debilidad de Mursi para hacer valer sus prebendas y su poder. De hecho, el presidente, que fue elegido con un discurso demagógico que incluía la limitación del enorme poder militar, la depuración de los elementos comprometidos con la dictadura, y el castigo de la represión militar y policial sufrida después de la caída de Mubarak, ha hecho todo lo contrario. La cúpula militar mantiene su poder económico intacto, la impunidad de la re-

## Poca participación y alto porcentaje del ‘no’ en el referéndum

# Egipto: La revolución resurge y se enfrenta a la reacción islamista



presión y de los cargos que medraron en el mubarakismo, y el jugoso convenio con Estados Unidos que permite al Ejército embolsarse 1.300 millones de dólares anuales. Además, el proyecto de Constitución incluye dos grandes reivindicaciones de los generales: que uno de ellos ocupe la cartera de Defensa, y que sean ellos los que decidan sus propios presupuestos, que lastran el desarrollo del país. Para fortalecer aún más esta alianza de intereses contra la revolución, en plena oleada de manifestaciones, Mursi ha devuelto a los militares el poder de detener a manifestantes.

### La maniobra electoral de Mursi

En una huida hacia adelante, intentando ahogar la lucha en la calle con las urnas, el gobierno convocó un referéndum para los días 15 y 22 de diciembre, sobre su proyecto de Constitución. Una Constitución que mantiene la esencia del régimen mubarakista y que se hace eco de las ideas reaccionarias integristas. Pero la fuerza de la revolución obligó al gobierno a múltiples escarceos. Intentó ganar tiempo con mesas de diálogo, pero no ha tenido éxito. La oposición política, representada en el Frente Nacional de Salvación de la Revolución, hasta ahora se ha mantenido firme en denunciar esos intentos; aunque este frente es muy heterogéneo y un sector de él hubiera aceptado gustosamente el ofrecimiento de Mursi, traicionando la lucha, el empuje del movimiento impulsó la firmeza ante esas maniobras dilatorias. Finalmente, el presidente ha tenido que retirar el decreto motivo inmediato de las protestas.

Sin embargo, el referéndum no ha sido aplazado ni anulado. Los islamistas pretendían demostrar legitimidad ante las masas revolucionarias. Han hecho una campaña intensa, en radio, televisión y mezquitas, llamando a participar en la “consolidación de Egipto”, “la estabilidad”, etc. También han utilizado las contradicciones de los dirigentes del frente opositor, donde se reúnen grupos burgueses como el de Mohamed el Baradei, colaboracionistas de Mubarak como Amro Musa, el Movimiento Seis de Abril (grupo juvenil protagonista en los primeros compases de la revolución), y la Corriente Popular (la organización del naserista Hamdin Sabahi, tercer candidato en las elecciones presidenciales del verano). El Frente Nacional de Salvación ha tenido una postura heterogénea ante el referéndum: mientras el Movimiento Seis de Abril y la Corriente Popular —los dos grupos más conectados al movimiento— llamaban al boicot, otros

sectores titubearon hasta el final sobre su participación (votando contra la Constitución) o no.

Los resultados del referéndum, celebrado en dos turnos (los días 15 y 22 de diciembre), no reflejan en absoluto un avance de la base social islamista. Al contrario. Según el gobierno, el *sí* ha obtenido un 64%, ganando en 24 provincias, frente a un *no* mayoritario en tres. Pero el dato más espectacular es la participación, que sólo ha sido del 33% con respecto al censo de 52 millones de electores. La abstención ha sido la más alta de los diferentes procesos electorales desde la caída de Mubarak; la anterior elección —la presidencial del verano pasado, en que fue elegido Mursi— contó con una participación del 50%. Esto significa que, si los datos del gobierno fueran ciertos, sólo el 20% de los egipcios censados apoyan esta Constitución. Pero esos datos hay que acogerlos con precaución, porque las irregularidades han sido continuas (sólo en la votación del día 15 la oposición denunció cuatro mil incidentes). De hecho, las asociaciones egipcias de observadores han pedido la repetición del referéndum, y el Frente Nacional ha anunciado la presentación de una denuncia para invalidarlo.

Otro dato de gran importancia es el resultado en las dos grandes aglomeraciones urbanas egipcias, las provincias de El Cairo y Alejandría, donde se concentra una gran parte del proletariado y de las masas revolucionarias que protagonizaron la caída de la dictadura. Según la Corriente Popular, el *no* ha arrasado allí; en El Cairo con un 68% y en Alejandría con un 72%. Incluso el gobierno reconoce la victoria del *no* en la capital, con un 57%. Este resultado adverso para los islamistas en los dos grandes centros de la revolución marca de forma clara el gran avance en la conciencia que pocos meses de mandato de Mursi ha supuesto, avance que probablemente irradiará con fuerza el resto del país.

### La lucha continúa

Es evidente que, pese a todos los medios a su alcance, los integristas de todos los matices, agrupados detrás de Mohamed Mursi, y la reacción en todas sus formas, deseosa de dar carpetazo a la revolución pese a sus contradicciones con los anteriores, no han tenido éxito con su maniobra electoral. El *no*, y en parte la abstención, reflejan cómo incluso en el terreno más desfavorable para la revolución (las urnas) ésta tiene una base fuerte. Es muy importante

para su desarrollo la movilización militante del proletariado, la juventud y otros sectores de El Cairo y Alejandría, que son y serán el motor de la lucha.

Es significativo de la debilidad del actual gobierno que poco antes del referéndum Mursi echara atrás, ante la sorpresa de su propio Gobierno, el plan de aumentar impuestos a algunos productos, liberalizar el precio de la electricidad y reducir subsidios a combustibles. El motivo es obvio: el miedo a alentar aún más el movimiento en las calles y el voto *no* en el referéndum. Mientras la oleada huelguística continúa (los 23.000 trabajadores de tabaco acaban de obtener una victoria tras dos días de huelga), los problemas no resueltos también se agudizan y la situación económica es crítica. La huelga de inversiones, la recesión del turismo, el aumento del déficit (11% del PIB), que consume las reservas de divisas (han caído más de la mitad desde el estallido de la revolución), tienden a acelerar el paro, la miseria, de amplias masas. Egipto ha negociado con el FMI un crédito por valor de 4.800 millones de dólares, por supuesto a cambio de duras medidas de ajuste, vitales para poder hacer frente a pagos urgentes. Sin embargo, la situación de inestabilidad es tal que éste se ha aplazado.

La lucha no ha acabado el 22 de diciembre, tras la segunda vuelta. La lucha en la calle, en la empresa, en el barrio, es el terreno fundamental de la revolución. También es necesario que el movimiento se dote de un programa revolucionario. Es imprescindible que la lucha contra los recortes en los derechos sociales y políticos, o de la mujer, o contra los prejuicios islamistas, es decir, contra la Constitución, se vincule a la lucha de la clase obrera por la mejora sustancial de su situación, con reivindicaciones concretas en cuanto a creación de empleo, salarios dignos, nacionalización de las grandes empresas bajo control de los trabajadores, ruptura de lazos con el imperialismo. Es decir, un programa que rompa con el sistema capitalista. Levantar la bandera del socialismo; construir organizaciones independientes del proletariado, como forma de ganar también a la juventud y otros sectores; denunciar el papel quintacolumnista de los grupos burgueses (que quieren desviar la revolución hacia la vía muerta de una inestable e inconsistente democracia burguesa); fomentar la unificación de las luchas obreras y de las masas revolucionarias contra el gobierno reaccionario, estimulando la consigna de la huelga general; éstas son las tareas del momento para los revolucionarios.

Eloy Val del Olmo

Miles de trabajadores de la CAF, Laminaciones Arregui (Grupo Celsa), Corrugados Azpeitia, Foronda, 010 y de otras empresas en lucha se manifestaron frente al parlamento vasco el día del debate de investidura de Urkullu. Mientras la clase trabajadora vasca tiene muy claro qué representa el nuevo lehendakari, en sede parlamentaria es diferente: PP, PSE-EE/PSOE y EH Bildu se han mostrado, desde ángulos opuestos, dispuestos a colaborar con el PNV.

La portavoz de EH Bildu, Laura Mintegi, ha dejado clara su posición: “Toda política encaminada a la soberanía tiene que pasar por un trabajo en común con el PNV y esperamos que su alma más independentista florezca”. Su Gobierno [del PNV] “tiene que ser valiente para cortar el cordón umbilical con un Estado que es autoritario e impositivo” (*El Correo*, 31/12/12). Desde el PSE-EE/PSOE la colaboración, el traspaso de poderes y los ofrecimientos de acuerdo son tan intensos que han merecido los elogios del propio Urkullu. Para Antonio Basagoiti “habrá posibilidades de acuerdo” con el ejecutivo peneuvista en la medida que se centre en la economía y apueste por la “estabilidad y la convivencia”.

### La crisis capitalista y la respuesta del movimiento obrero

Tras el contacto con los distintos grupos, el PNV confirmó la decisión ya tomada anteriormente de formar un gobierno en minoría con 27 de los 75 escaños con que cuenta la cámara vasca. Urkullu ha colocado a Josu Erkoreka (exportavoz del PNV en el parlamento estatal) como hombre fuerte para facilitar las relaciones con el Gobierno de Rajoy, y ha marcado como prioridad en esta primera parte de su mandato la “recuperación de la competitividad” y el “crecimiento de la economía vasca para el 2015”, a través de un proceso de duros ajustes y recorte del gasto público, en sanidad y en educación, que implicará todavía más sufrimiento para la mayoría de la población.

Desde el principio de la crisis en 2008, ha desaparecido el 10% del tejido productivo de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y 6.100 empresas han cerrado, 2.000 de ellas en 2012. El paro llega ya a los 180.000 trabajadores y se calcula que en 2013 se perderán 21.000 empleos más; por otra parte, en Euskadi viven más de 157.600 personas (7,3% de la población) en riesgo de pobreza, datos que son la consecuencia inevitable de las políticas neoliberales de privatizaciones y recortes sociales, y del fracaso de la socialdemocracia.

La clase trabajadora vasca ha respondido a la crisis con sucesivas huelgas genera-

# La investidura de Urkullu: Lucha de clases y cuestión nacional

## Perspectivas para el Gobierno del PNV



Manifestación de trabajadores de CAF, Cementos Leona, Corrugados Azpeitia, ALESTIS, Celsa Atlantic (Laminaciones Arregui) y del 010 del Ayuntamiento de Vitoria ante el parlamento vasco

les desde el 21 de mayo de 2009, logrando la respuesta más contundente en la convocatoria unitaria del 29 de marzo de 2012. Así lo demuestra que cada vez haya más movilizaciones de empresas conjuntas, los trabajadores comprenden la necesidad de un sindicalismo combativo, de la unificación y coordinación de las luchas obreras, frente a unas direcciones sindicales que son incapaces de alcanzarla. Con esta táctica se está consiguiendo echar atrás en los tribunales EREs de extinción, y que un total de 422 despidos hayan sido declarados nulos por negación de derechos fundamentales en Koyo Bearings, Celsa Atlantic y Corrugados Azpeitia. La plantilla de Guardian Llodio también ha conseguido la retirada del ERE de extinción para 139 trabajadores y un convenio que bloquea la reforma laboral, tras 60 días de huelga y lograr que todo el pueblo, literalmente, se volcase en su apoyo, como ahora lo están haciendo con la plantilla de Lipmesa. Los trabajadores en lucha de la CAF también han logrado la retirada del expediente de suspensión que afectaba a 869 trabajadores, tras 10 jornadas de paro de cuatro horas; y los trabajadores de Formica tras varios meses de huelga indefinida, con una de las mayores movilizaciones en décadas en Galdakano, han ratificado un acuerdo que triplica el mínimo indemnizatorio legal que establece la reforma laboral.

Estas victorias parciales permiten a la clase trabajadora aumentar la confianza en sus propias fuerzas pero el auténtico logro es poder estrechar lazos de unidad y elevar la lucha sindical a nivel político, a una lu-

cha de clase contra clase que, en lugar de la búsqueda de pactos y compromisos con la burguesía, oriente la fuerza del movimiento obrero a un cambio social profundo.

### Los pactos a la carta. La izquierda abertzale en la encrucijada

Al PNV le hubiese gustado, y así lo ha manifestado, que el PP (10 escaños) hubiese obtenido al menos un escaño más, para poder pactar sin mayores problemas unos presupuestos de derechas y no necesitar del apoyo de EH Bildu (21 escaños), o del PSE-EE/PSOE (16). En periodo preelectoral Urkullu denunció insistentemente la “horrible” situación de las cuentas públicas administradas por los socialistas, utilizando la misma estrategia de Rajoy en Madrid: culpabilizar a la herencia recibida de los recortes sociales que se vería “obligado” a aplicar. Sin embargo, su debilidad objetiva en el Parlamento, la radicalización de la lucha de clases, la necesidad de abortar cualquier acuerdo entre Bildu y PSE (después del pacto de ambos en la diputación de Guipúzcoa), junto a la excelente disposición de la dirección del Partido Socialista, le ha hecho reconsiderar su postura inicial haciendo algunas concesiones al PSE-EE/PSOE.

Por supuesto, el otro frente donde el PNV va a intentar ganar estabilidad es con la izquierda abertzale: pactar con Bildu, puntualmente, para desactivar la conflictividad en las calles. ¿Cómo hacerlo? Ofreciendo “ayudar” en el proceso de paz y más concretamente en la cuestión de la salida de la

cárcel de los presos de ETA. Esta táctica, lamentablemente, parece haber encontrado eco entre dirigentes de Bildu que insisten permanentemente en el entendimiento con el PNV. No son casualidad los editoriales y artículos en Gara defendiendo el pacto alcanzado en Catalunya entre CiU y ERC, justificando veladamente el respaldo a los recortes a cambio de avanzar en la “soberanía nacional”.

La idea de que apoyando puntualmente al PNV la izquierda abertzale puede salir fortalecida es completamente ingenua y muy equivocada. El PNV quiere dar el abrazo del oso a la izquierda abertzale, implicarla en su política de ajustes y ataques a la clase obrera, “institucionalizar” su vuelta al parlamento, y desactivarla como organización de lucha que puede cuestionar los fundamentos del capitalismo. La pretensión de que la burguesía vasca puede facilitar la resolución del problema nacional, puede ayudar en la conquista del derecho de autodeterminación, también es falsa. El PNV no quiere desentenderse del mercado español, del que obtiene grandes plusvalías y beneficios, al contrario: quiere fortalecer esa relación pero, obviamente, en su propio interés. La demagogia del PNV, que en el pasado aplicó sin mayor objeción la legislación de excepción contra la izquierda abertzale y todas las medidas represivas que le dictaron desde Madrid, sólo pretende contener la lucha de clases. Incorporar a Bildu, a ELA y LAB a su campo político, a través de pactos sociales, envueltos en el celofán de “acuerdos a favor de la soberanía”, es un objetivo que va a intentar lograr en esta legislatura, sobre todo cuando se vean más desgastados.

La izquierda abertzale tiene una responsabilidad fundamental en este momento. Puede elegir el papel de ERC —comparsa en los planes antiobreros de CiU a cambio de un inseguro referéndum que no tiene nada que ver con el ejercicio real de autodeterminación— o el papel de liderar la oposición de izquierdas a la burguesía vasca, a la derecha vasca, agrupando a la mayoría de los explotados, de los trabajadores y de las capas más afectadas por la crisis capitalista, en torno a un programa de liberación nacional y de ruptura con el capitalismo: el programa de la transformación socialista de la sociedad.

Ver artículo completo en [www.elmilitante.net](http://www.elmilitante.net)

Susana Iglesias (Afectada)

## Avilés: el nuevo Plan de Urbanismo para La Lleda deja en la calle a ocho familias

El 21 de diciembre se aprobó en el Ayuntamiento de Avilés (Asturias) el Plan Urbanístico de La Lleda, por el cual se pretenden construir 640 nuevas viviendas. Para hacerlo, se va a proceder a la expropiación de ocho familias que actualmente residen en el único bloque de viviendas de la zona. Esta expropiación supondrá en la práctica el desahucio de los vecinos, que no tenemos otra opción que aceptar una irrisoria indemnización a cambio de perder nuestra casa. Indemnización que en algún caso tendría que ser destinada a terminar de pagar la hipoteca de unos pisos que podrían demoler en pocos meses.

Desde el Ayuntamiento se escudan en que la obra que se ejecutará es “de interés general” y nos ofrecen la “opción” de en-

trar a formar parte de la Junta de Compensación, algo que, por el enorme desembolso económico que conlleva es inalcanzable para una familia trabajadora\*.

Es intolerable que se nos pretenda convencer de que este plan urbanístico es de “interés general”, mientras miles de pisos permanecen vacíos cuando podrían ser utilizados para satisfacer las necesidades de vivienda. Pero en lugar de expropiar esos pisos propiedad de las constructoras, expropiaron a los trabajadores para satisfacer el afán de beneficios de los empresarios.

¿Qué beneficio general se otorga a la sociedad con la construcción de más pisos?

El único beneficio será el que consigan los constructores involucrados en el proyecto.

Por otro lado, la actitud del Ayuntamiento del PSOE, desentendiéndose totalmente de una situación de la que son responsables, por cuanto fueron ellos los que cedieron los terrenos donde se ubica nuestro edificio, les convierte en cómplices de este atropello que dejará a varias familias en la calle. Es lamentable que un partido que se dice de izquierdas vele más por los intereses de los constructores que por los de las familias obreras.

Los vecinos afectados de La Lleda exigimos una solución real a este conflicto, que

pasa por un realojo digno para los afectados o una indemnización suficiente para poder adquirir otra vivienda. Además, frente al grave problema de la vivienda que deja en la calle a cientos de miles de familias obreras, reclamamos la expropiación de los pisos vacíos propiedad de las constructoras que han amasado fortunas durante la pasada década.

\* El sistema de urbanización por Junta de Compensación es el más injusto para pequeños propietarios y el más beneficioso para grandes constructoras, que pueden hacerse con los terrenos y las viviendas de los vecinos por irrisorias cantidades y construir a sus anchas o esperar mejores tiempos, para seguir enriqueciéndose con la especulación urbanística.

Jaume García

# Acuerdo de gobierno CiU-ERC y la farsa del 'giro social'

Tras el batacazo electoral de CiU, ha sido finalmente ERC la que ha salvado los muebles a Artur Mas, llegando a un acuerdo de gobierno. En la negociación, ERC se ha comprometido a apoyar al nuevo gobierno de Mas y sus presupuestos a cambio de toda una serie de subidas de impuestos y de que en 2014 se celebre la consulta sobre el futuro de Catalunya, "con la excepción de que el contexto socioeconómico y político requiriese una prórroga", según reza el documento del acuerdo. Sin embargo, la naturaleza profundamente antisocial y antidemocrática del nuevo gobierno de CiU no ha cambiado para nada.

## Recortes inmediatos y salvajes

La formulación de la consulta del 2014 no es una casualidad. En cualquier circunstancia CiU y ERC podrán aplazar su celebración. De momento, la perspectiva de su convocatoria le viene muy bien a CiU para desviar la atención de su política social y para ERC la concreción de la fecha era muy importante, aunque fuera así de condicional, para poder justificar los presupuestos como unos "presupuestos de transición hacia la independencia".

A pesar de los nueve nuevos impuestos, se admite que de los 4.000 millones de euros de recortes para 2013 que anunció el Govern justo después de las elecciones, 3.000 millones son "inevitables". Además, la recaudación de esas nuevas tasas dependerá de la evolución de la economía, que sigue anclada en la depresión, así que es muy probable que tras el recorte de 3.000 millones de euros nuevos ataques se sucedan en la educación, la sanidad públicas, las condiciones laborales de los funcionarios y las empresas públicas.

## Pocos cambios en la composición del gobierno

Además, sólo hay que echar un vistazo a la composición del nuevo gobierno para comprobar que el cacareado "giro social" del gobierno que supuestamente ha conseguido ERC



De izquierda a derecha en la primera fila: Pere Navarro (PSC), Oriol Junqueras (ERC), Artur Mas (presidente de la Generalitat) e Irene Rigau, consejera de Educación.

se queda en nada: Boi Ruiz e Irene Rigau, responsables de los salvajes recortes que han sufrido la sanidad y la educación pública respectivamente, se mantienen en sus cargos. El nefasto Felip Puig, responsable de la brutalidad policial de los Mossos, continúa en el Govern, aunque en otro departament. Su sustituto en Interior, Ramon Espadaler, es un conocido reaccionario de Unió. Sin olvidar que el cerebro de la política económica del anterior Govern, Andreu Mas-Colell, se mantiene al frente de Economía y aumenta su peso político dentro del nuevo ejecutivo. Las palabras de Artur Mas acerca de un giro social, o la búsqueda del bienestar social es pura demagogia. Los dirigentes de ERC son los responsables de que CiU pueda continuar enmascarándose como la defensora de los intereses de toda Catalunya.

## La izquierda ante el nuevo gobierno

Aunque el PSC ha votado en contra de la investidura de Artur Mas —con los votos de ERC era suficiente—, Pere Navarro ha tenido la mano a un futuro acuerdo con CiU,

en aras de la "unidad nacional". Los puentes entre CiU y el PP tampoco están del todo rotos, aunque pueda parecer lo contrario. De hecho, finalmente ERC no ha exigido a CiU que rompiera sus acuerdos con el PP en la diputación de Barcelona, en Badalona o en otros ayuntamientos.

El gobierno de CiU apoyado por ERC va a estar sacudido por la crisis, los recortes y la respuesta social en la calle, lo que inevitablemente traerá más inestabilidad. Las muletas de CiU, por desgracia, se encuentran en la izquierda. Los sindicatos siguen tendiendo la mano a CiU para alcanzar un acuerdo social. En las cúpulas de los sindicatos existen muchos vínculos con la burguesía que presionan hacia el acuerdo: la consellera de Bienestar Social, dirigente de Convergència es también dirigente de la UGT, hasta 2010 secretaria de Política Institucional del sindicato.

No es casualidad que, mientras en Madrid se ha visto una movilización histórica de la sanidad pública contra la privatización, en Catalunya los sindicatos han evitado dar cualquier respuesta unificada, a pesar de que en varios hospitales (Sant

Pau, Parc Taulí, Clinic...) sus trabajadores protagonizaron encierros durante estas Navidades.

## Un gobierno débil

Además, los constantes ataques del PP en el terreno nacional son utilizados por CiU para otorgarse una aureola progresista que no tienen. Los ataques del ministro Wert al catalán permitieron a la consellera Rigau presentarse como una férrea defensora del idioma cuando con su gestión en el Departament d'Educació la enseñanza pública ha sufrido el mayor retroceso de todo el Estado. Artur Mas convocó una cumbre de partidos en defensa de la inmersión lingüística y tanto el PSC y ERC como ICV olvidaron la política educativa de CiU para arropar al Govern. Lo mismo está sucediendo con el derecho a decidir. Las CUP, que con un discurso marcadamente de izquierdas han denunciado de forma bastante clara y rotunda la política social de CiU, así como el apoyo dado por ERC a Mas, han defendido sin embargo un frente común con CiU en la cuestión lingüística y han tendido la mano a Mas para conseguir la autoderminación, lo cual nos parece un grave error. CiU es el representante de la dictadura financiera mundial en Catalunya. ¿Qué clase de autodeterminación puede venir de manos de esta gente?

La perspectiva para Catalunya, como para el resto del Estado, es de intensificación de la lucha de clases y el gobierno de Mas seguirá desgastándose, como en la anterior legislatura. De hecho, si todos los partidos cuyos dirigentes se denominan de izquierda negasen cualquier tipo de apoyo a CiU, directo o indirecto, el gobierno de Mas caería inmediatamente, lo cual constituiría un paso muy importante en la lucha contra los recortes sociales en Catalunya y en el resto del Estado.

Andreu Roig  
Abogado

## No a la ley de tasas judiciales

# Una justicia groseramente a favor de los ricos

**El campo de la justicia no está al margen de todos los planes de guerra antisocial unilateral y sin tregua del gobierno del PP contra la mayoría de la sociedad. Al colapso estructural del sistema judicial, por falta de medios materiales y humanos (despido de 1.200 jueces sustitutos), y al caos absoluto a todos los niveles, donde priman los privilegios de los ricos y poderosos, la impunidad de la corrupción y de los abusos de poder con sentencias e indultos escandalosos, propios del régimen franquista, ahora se suma la ley de tasas judiciales, que implica lisa y llanamente dinamitar cualquier vestigio de igualdad ante la justicia.**

A partir de ahora, cualquier trabajador que recurra cualquier sentencia de lo social debe pagar 500 euros en 2ª instancia y 1.200 en 3ª instancia. Por ejemplo, la reclamación de una indemnización de 1,3 millones de euros de un tetrapléjico víctima de un accidente de tráfico, donde las aseguradoras suelen ofrecer muchísimo menos de lo justo y necesario, y suele judicializarse, llegar hasta la 3ª instancia (Tribunal Supremo), cuesta 19.550 euros de tasas. Y además éstas no se devuelven aunque se gane el juicio. En una gran cantidad de demandas, como recurrir multas de tráfico, aunque sean de 90 euros tienen una tasa fi-

ja de 200 euros en 1ª instancia judicial, o las deudas a comunidades de propietarios, divorcios..., serán a veces superiores las tasas que el objeto que se reclama, y si no, en todo caso, desproporcionadamente caras, llegando a ser un obstáculo económico insalvable, teniendo que soportar ilegalidades e injusticias sin posibilidad de amparo judicial.

Con esta reforma se consigue una justicia groseramente a favor de los ricos. Se atrae la especulación y actividades impunes de mafias extranjeras (Eurovegas, obtención de la nacionalidad comprando vivienda de 160.000 euros, trabajadores sin derechos...), se favorece más todavía la impunidad de los abusos de poder y de la corrupción de las administraciones y las estafas, legales o no, de grandes compañías (financieras, aseguradoras, telecomunicaciones, hidroeléctricas...) donde sus víctimas no podrán demandarlas por las tasas, y aún teniendo laudos arbitrales y sentencias favorables no podrán ejecutarlos pagando tanta tasa a cada trámite, no les saldrá a cuenta demandar.

Se favorece a los lobbys de grandes despachos de abogados y los de bajo coste, con su ejército de becarios y *minijobs*, al tiempo que se perjudica duramente a la mayoría de abogados y procuradores en un mercado en profunda crisis. Paralelamente se acelera la degradación y privatización de los Servicios de Orientación Jurídica y Turno de Oficio, como en Madrid, y se fomenta el negocio de las mediaciones y arbitrajes extrajudiciales, con sus masters y servicios de mediación y arbitraje mucho más caros que la anterior vía judicial, todo como alternativa a la vía judicial. Así se rebaja el cumplimiento de normas contrarias a los intereses de los más poderosos, por ser costoso y arriesgado reclamarlo judicialmente.

El malestar y rechazo provocado en el sector ha sido muy fuerte, incluso se ha reclamado la convocatoria de huelgas antes de que entrara en vigor la ley, a las que, finalmente, no se ha puesto ninguna fecha, desaprovechando la posibilidad de echar atrás está agresión y abrirle un nuevo frente de lucha al PP.



La ley de tasas es un gravísimo ataque al conjunto de los trabajadores y tiene una trascendencia que va más allá del propio sector de la justicia. Los sindicatos y partidos políticos de izquierdas deben tener una posición política de clase y tomar la iniciativa de convocar una huelga general de justicia de 48 horas como primer paso en la lucha, defendiendo la derogación de esta ley, así como su vinculación a la lucha contra las contrarreformas de penalización del aborto y de manifestantes, la cadena perpetua, además de exigir el cese no solo del ministro de Justicia, sino del gobierno del PP, lo que implica que esta lucha debe desembocar en la convocatoria de una nueva huelga general y vincularse a la derogación de las contrarreformas laboral, educativa y demás.

Daniel Reyes  
CCOO

# Cospedal apuesta por la controvertida Fundación O'Belén

La Fundación O'Belén es una entidad sinónimo de lucro cuyo objetivo, declarado por ellos mismos, es la atención y protección de los menores, jóvenes y sus familias. Loable objetivo con el que podrían engañar a algún incauto hasta que vemos quiénes son sus fundadores: Emilio Pinto Rodríguez (ex portavoz del PP en Sigüenza y propietario de Ain-Karen Viajes, empresa dedicada a "ayudar" a la Iglesia en su labor evangélica organizando peregrinaciones), Manuel Pizarro Moreno (vocal de la FAES, ex presidente de Ibercaja y expresidente de Endesa), José Morales Paulés (directivo de Ibercaja), Javier Herrero Sorriqueta (ex consejero delegado de Iberdrola) y Manuel Ureña Pastor (arzobispo, miembro de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis). Con estas credenciales nada bueno se podía presagiar.



Esta entidad fue de las pioneras en la gestión de los llamados centros terapéuticos de protección de menores, en realidad una especie de cárceles donde se recluye a niños supuestamente afectados por trastornos del comportamiento. Gracias al caudal de dinero público que este tipo de empresas saquea a través de la privatización de los servicios sociales, O'Belén fue ampliando el negocio, pasando a gestionar centros de acogida y de reforma, programas de inserción laboral e incluso los servicios de acogimiento familiar.

En el 2009 durísimos informes de Amnistía Internacional y del Defensor del Pueblo confirmaban lo que numerosos colectivos llevaban años denunciando: en los centros terapéuticos de protección de menores se vulneran los derechos humanos ("apreciamos irregularidades y vulneración de los derechos de los menores, a los que se medica sin respetar las prescripciones de la Ley de autonomía del paciente, y son sancionados desproporcionada y arbitrariamente").\*

Especialmente duro con O'Belén, el informe del Defensor del Pueblo demostraba que en sus centros se utilizan celdas de aislamiento, prohibido explícitamente por la ONU ("un solo instante de permanencia en el interior de esas salas permite aseverar que atentan no sólo contra la salud psíquica y la dignidad de los menores, sino también contra los más elementales sentimientos de hu-

manidad"), se abusa de psicofármacos ("atiborrar de pastillas a los adolescentes en los centros de acogida revela dejadez y rutina profesional en lugar de implicación con el tratamiento"), se producen agresiones físicas ("las contenciones se realizan varias veces al día y con una agresividad innecesaria y desproporcionada") y humillaciones de todo tipo ("se realizan registros con desnudos integrales sin justificación... se encubren prácticas contrarias a los derechos de los menores como atar a dos niños uniéndoles por las muñecas o prohibirles la asistencia al centro escolar"). Desgraciadamente, debido a estas condiciones propiciadas por la privatización de este tipo de centros, al menos tres niños de entre 12 y 14 años han perdido la vida bajo custodia de O'Belén. Finalmente, gracias a la presión social varios de sus centros fueron clausurados y su presidente, Emilio Pinto, se vio obligado a dimitir.

## El negocio resurge de la mano del PP

Tras el cierre de sus centros parecía que se les acababa el chollo (llegaban a recibir hasta 6.900 euros mensuales por plaza). Pero con la llegada de su nuevo presidente, el psiquiatra Javier San Sebastián (hermano de la reaccionaria periodista Isabel San Sebas-

tián, adalid del "todo es ETA"), y del PP al gobierno de Castilla-La Mancha, el dinero público vuelve a correr por las cuentas de O'Belén.

La Junta concedió la reapertura de uno de sus centros clausurados en Azuqueca de Henares, reconvertido en centro de internamiento psiquiátrico infanto-juvenil. Y ahora todo parece indicar (aunque no está confirmado) que va a concertar con esta empresa un nuevo centro de primera acogida de menores y un centro de día para jóvenes y adolescentes, también en Azuqueca. Por otro lado, la dirección general de Familias, Menores y Promoción Social ha anunciado la creación de un macrocentro de reforma que será gestionado privadamente vía concierto (y todo hace pensar que la entidad beneficiaria será O'Belén, ya que incluso el anuncio de la licitación se hizo en presencia de su presidente). Según la Junta, el concierto superará ampliamente los siete millones. Mientras despide a miles de profesores, recorta salvajemente en servicios sociales y deja en la indigencia a cientos de jóvenes extutelados al suprimir el Programa de Autonomía Personal (dejando en la calle, de paso, a sus educadores de referencia), el gobierno de Cospedal plantea promocionar socialmente a familias y menores... ¡construyendo una cárcel para niños!, que además nace privatizada.

Y para redondear la jugada, O'Belén ha creado junto al ayuntamiento de Chiloeches (gobernado por el PP) una fundación que se encargará de gestionar una residencia de ancianos financiada con los fondos europeos destinados al desarrollo rural. Nada de esto resulta extraño si tenemos en cuenta que José Ignacio Echániz, consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta es hermano de Teresa Echániz, miembro del patronato de la Fundación Confías. Esta fundación es presidida por Javier San Sebastián, también presidente de O'Belén. Tampoco parece casualidad que este psiquiatra sea firme partidario de la utilización de psicofármacos desde edades muy tempranas, ya que sus congresos los patrocinan empresas farmacéuticas como Lilly y Jansen-Cilag. Un ejemplo más del funcionamiento corrupto del capitalismo y sus representantes políticos. Las privatizaciones únicamente sirven para trasvasar dinero público a manos privadas, afectando tanto al servicio prestado como a los trabajadores del sector. El PP está utilizando su poder político para repartirse los servicios públicos entre familiares y amigos, como es el caso de los procesos de privatización de la sanidad, que está teniendo como principal beneficiaria a Capiro Sanidad (controlada por CVC Partners Capital, una SICAV con sede en un paraíso fiscal), para quien trabajan Teresa Echániz como subdirectora de investigación, e Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal.

No podemos consentirlo. Los trabajadores de la sanidad pública madrileña están marcando el camino. Los sindicatos de clase tienen la responsabilidad de unificar todas las mareas y extender la lucha al conjunto de la sociedad. Porque la privatización pervierte en origen la función de la educación, la sanidad y los servicios sociales, pasando a ser su objetivo el lucro empresarial. Unas condiciones de vida dignas para nuestra clase pasan por conseguir que estos servicios sean de titularidad y gestión pública, democráticos y de calidad.

\* Las citas entre paréntesis son extractos del discurso en el Senado de Enrique Mújica como Defensor del Pueblo, presentando el informe sobre centros de protección de menores con trastornos de conducta.

## No a los ataques contra los pensionistas

Miguel Mitxitorena

**El 14 de diciembre los jubilados y pensionistas de Navarra nos manifestamos en Pamplona contra la decisión del gobierno del PP de no revalorizar las pensiones en 2012 conforme al IPC, la subida totalmente insuficiente del 1 o el 2% y para denunciar el engaño y la manipulación de la derecha.**

El 17 nos volvimos a manifestar en Pamplona y en el conjunto del Estado, convocados por la Cumbre Social, por idénticos motivos y contra los ataques que estamos sufriendo desde 2010. Unas semanas antes hubo una asamblea y posterior manifestación por el centro de Pamplona para dar a conocer que a los jubilados (muchos de los cuales luchamos contra el franquismo en las fábricas) no nos van a someter.

Las organizaciones de pensionistas convocantes han advertido de que, en los últimos dos años, se ha acumulado una reduc-

ción de poder adquisitivo de, prácticamente, un 5%, a la que hay que sumar el incremento del IVA que afecta a un 60% de los productos básicos, como alimentación y, añadido a esto, productos como el gas, el butano y la electricidad han aumentado sus precios un 8, un 19 y un 70%, respectivamente, en los últimos años.

### Pensiones miserables

A pesar de que nos dicen que la media de las pensiones está subiendo, la realidad es que un 58% de los pensionistas de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, casi 400.000 personas, cobran menos de 700 euros. Este porcentaje asciende en el caso de las mujeres pensionistas al 77%. En el Estado español, el número de pensiones se ha elevado en diciembre hasta los 9 millones. Más de la mitad de estas prestaciones son por jubilación, 5.391.504; 2.331.726 corresponden a viudedad; 943.021 a incapacidad permanente; 294.827 a orfandad, y 37.967

son a favor de familiares. La pensión media percibida es de 836,27 euros, pero estos son datos estadísticos. La realidad nos dice que casi la mitad de los pensionistas tiene unos ingresos inferiores a los 641 euros del Salario Mínimo Interprofesional. Y esto convive con una situación en la que más de 300.000 hogares en el Estado español no tienen otro ingreso que la pensión, porque el resto sus miembros está sin empleo.

Otra consecuencia criminal de los recortes es que los pensionistas nos vemos obligados a pagar, como mínimo, el 10% de las medicinas cuando estamos en una edad en la que no nos medicamos por gusto. A esto hay que añadir los nuevos pagos que prevén las comunidades autonómicas o el gobierno central de prótesis, viajes en ambulancia, euro por receta y así hasta tener que decidir si con nuestra pensión comemos un día o ese dinero lo dedicamos a medicinas.

La Ley de Dependencia fue un paso importante pero totalmente insuficiente para

ayudar a mejorar la calidad de vida de los discapacitados, enfermos crónicos y, sobre todo, ancianos. El ataque del gobierno del PP a la dependencia ha sido especialmente cruel con este colectivo. Pero la cosa no queda ahí. La burguesía de cara a mantener sus beneficios está atacando con saña las conquistas sociales que los trabajadores habíamos conseguido, entre ellas poder aspirar a una jubilación decente. Ahora, una vez aprobada la jubilación a los 67 años, quieren dar más vueltas de tuerca planteando subir el cómputo de años de cotización de 15 a 20, lo que supone más recortes en la cuantía de la pensión. Pero los pensionistas no nos vamos a rendir sin luchar. Luchamos contra los empresarios y su dictadura y conseguimos mejoras. Los trabajadores (y la mayor parte de los jubilados fuimos trabajadores) unidos tenemos fuerza para echar atrás estos ataques.

**¡Por unas pensiones mínimas de 1.100 euros!  
¡Sí hay dinero, lo tienen los banqueros!**

Víctor Taibo

## La sanidad pública en pie de guerra

# Hay fuerza para continuar la lucha: por una huelga general en Madrid

El pasado 27 de diciembre la Asamblea de Madrid aprobaba, con los votos exclusivamente del PP, la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del año 2013, que supondrá, entre otras cosas, la privatización de seis hospitales públicos y del 10% de los centros de salud, afectando a 1,5 millones de madrileños, así como el establecimiento del euro por receta. Mientras los diputados del PP votaban la privatización de la sanidad madrileña, algunos de ellos mientras jugaban con sus móviles a "Apalabrados", miles de personas volvían a manifestarse en los alrededores de la Asamblea, culminando así la quinta semana de paros protagonizados por médicos, enfermeras y resto de personal sanitario.

### El fraude de la sanidad privada y las mentiras del PP

Desde que estalló el conflicto en la sanidad madrileña el Gobierno del PP se ha dedicado a criminalizar a los trabajadores de la sanidad pública, tachándoles de vagos y maleantes, además de desplegar una auténtica campaña de mentiras y tergiversaciones, tratando de vender las bondades de la entrada del sector privado en el ámbito sanitario. Sin embargo, cuando un día tras otro se han conocido análisis y opiniones especializadas a este respecto, todas han sido concluyentes: la sanidad privada resulta más cara que la sanidad pública. Este hecho es tan incuestionable que el propio consejero de Sanidad, Fernández Lasquetty, afirmó en una rueda de prensa no saber cuánto se ahorraría con el plan de privatizaciones, quedando en ridículo.

Una cama en un hospital privado cuesta 1.660 euros al día, mientras que en un hospital público cuesta 955 euros, es decir, un 74% más barata\*. Un caso significativo es el de la Fundación Jiménez Díaz, donde el coste de una cama es de 675.000 euros al año, mientras que en un hospital público como el Clínico la cifra es de 338.000. Un estudio de la UGT, comparando hospitales similares, como son la propia Fundación Jiménez Díaz y los hospitales públicos de La Princesa y Puerta de Hierro, tanto desde el punto de vista de la complejidad asistencial como por el número de camas, demuestra la mayor eficacia de estos últimos. El estudio confirma que, a pesar de que los hospitales públicos analizados atienden más urgencias, realizan más operaciones de mayor complejidad, como trasplantes o cirugía cardíaca, tienen más estancias en la UCI o realizan más TAC y resonancias, el dinero asignado a los mismos es inferior al que recibe la Fundación Jiménez Díaz, 147 y 227 millones respectivamente frente a los 288 que recibe esta última. El objetivo del Gobierno del PP no es otro que abrir aún más al sector privado el negocio de la sanidad, que se estima en más de 400 millones de euros.

### Beneficio privado, un peligro para la salud

El criterio del máximo beneficio es un peligro para la salud de la población. Un ejemplo claro lo encontramos en el hospital Infanta Elena de Valdemoro, uno de los tres hospitales madrileños ya por completo bajo gestión privada. El director de este hospital presionaba a sus médicos, tal y como ha revelado un correo electrónico, a no derivar pacientes a la sanidad pública. Este hospital privado, como la mayoría de los actualmente existentes en Madrid, es de nivel 1, que implica que tiene menos especialidades y que por tanto tratan cuestiones de menor dificultad. Así, las operaciones o tratamientos más complejos deben ser abordados en hospitales de nivel 2, grandes complejos hospitalarios superespecializados, que



requieren mayor inversión y atienden a grandes cantidades de población y que, excepto la Fundación Jiménez Díaz, son en su totalidad públicos. En el caso de que un hospital privado deba derivar un paciente a uno público de este tipo, queda obligado a abonar los costes correspondientes. De ahí que el director del hospital de Valdemoro escribiera en dicho correo que hay que tener "en cuenta que todo se cobra a precios oficiales y que nos tenemos que empezar a tomar muy en serio el mantra 'El dinero sigue al paciente'". De hecho, este tipo de prácticas ya ha sido objeto de numerosas denuncias.

Otro ejemplo del fraude que supone la sanidad privada es el rescate realizado por la Comunidad de Madrid, por valor de dos millones de euros en 2010, de los hospitales privados-concertados que han ido a la quiebra, o el caso del hospital de Collado Villalba cuyo mantenimiento cuesta 900.000 euros al mes a pesar de mantenerse completamente cerrado. Y se atreven estos individuos a hablarnos de modelos de gestión y eficiencia. ¡Es una auténtica vergüenza!

### Una lucha impulsada por abajo

El PP ha perdido ya esta batalla entre la opinión pública. La inmensa mayoría de la población madrileña simpatiza abiertamente con la lucha en defensa de la sanidad pública. El respaldo que ha tenido esta movilización no sólo se debe a la percepción de que una conquista social fundamental está en peligro sino también a los métodos y decisión con que los trabajadores del sector la han llevado adelante desde el primer momento. Por un lado con planteamientos contundentes, como han sido las seis jornadas de huelga del conjunto del personal sanitario convocadas por los sindicatos integrantes de la Mesa Sectorial, y especialmente la huelga indefinida convocada por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), que se ha mantenido durante cinco semanas, sumando veinte jornadas de huelga entre los médicos, y que ha supuesto la pérdida de hasta 2.000 euros para aquellos facultativos que han seguido todos los paros. No han importado las dificultades económicas cuando se ha planteado de forma seria la movilización, convirtiéndose incluso esta radicalidad en un activo para el éxito de la misma. La movilización se ha impulsado por abajo, mediante asambleas (no sólo de los trabajadores del sector, sino de cara a explicar las causas de la lucha al conjunto de la población), y encierros permanentes, con la participación masiva de

médicos, enfermeras, celadores y resto de personal sanitario, saliendo a las calles de los barrios de Madrid para ganar el apoyo activo del resto de trabajadores, y convocándose innumerables manifestaciones, concentraciones y actos que han contado con el respaldo del conjunto de los trabajadores. Una movilización basada en los métodos tradicionales de la clase obrera, que fueron los que en los años 70 permitieron derribar la dictadura franquista y conquistar gran parte de las conquistas sociales que hoy tratan de arrebatarlos. Un ejemplo de esto ha sido la constitución en determinados hospitales públicos de cajas de resistencia, cediendo muchos médicos íntegramente los salarios cobrados como consecuencia de los servicios mínimos que estaban obligados a realizar.

Otro ejemplo de la contundencia de la lucha ha sido la actitud mantenida con la supuesta apertura de negociaciones a mediados de diciembre, manteniéndose los paros durante las mismas. De hecho, estas negociaciones, tal y como han denunciado los convocantes, no han sido más que un burdo intento del Gobierno de la Comunidad de lavarse la cara, viéndose, por otro lado, obligado a ello fruto de la fuerza de la movilización.

### Por una huelga general en Madrid

El conflicto de la sanidad madrileña ha demostrado claramente que sí se puede, que hay ambiente social y disposición a la lucha por parte de los trabajadores para echar atrás los planes de la derecha. Esta lucha constituye un modelo y una fuente de inspiración para el conjunto de los trabajadores de todo el Estado. La clave para dar a este movimiento un salto hacia adelante está en las manos de los dirigentes de CCOO, UGT y CGT de Madrid, con la convocatoria de una huelga general de 24 horas en la Comunidad. Esto es lo que deberían estar defendiendo también los partidos de izquierdas, especialmente IU. Se están dando las mejores condiciones para transformar la rebelión de los trabajadores de la sanidad en una rebelión social más amplia en todo Madrid que dejaría al gobierno regional completamente suspendido en el aire. Un gobierno que ya se ha dejado muchas plumas por el camino y ha sido contestado masivamente en la calle. De hecho, en paralelo al conflicto sanitario se están produciendo luchas también muy radicalizadas en Metro, EMT, Telemadrid (en huelga indefinida) y muchas otras empresas y sectores. La convocatoria de una

huelga general en Madrid serviría para unificar dichos conflictos, que tienen una causa común, pero además daría a la lucha en defensa de la sanidad pública, que es ahora el punto más importante y que es una causa del conjunto de la clase obrera, un cauce organizado mucho más amplio y contundente.

Se pondría aún más en evidencia el enorme aislamiento social de uno de los gobiernos autonómicos más brutales en política de recortes sociales y de derechos. No es casualidad que Madrid, donde está gobernando la derecha con el perfil más duro, haya sido una de las puntas de lanza de la contestación social en los últimos años: 15-M, Marea Verde, 25-S, multitudinarias manifestaciones en las huelgas generales y estudiantiles, etc. Ahora, la lucha contra los planes de privatización de la sanidad pública ha extendido aún más el odio de la población hacia este gobierno, que ha sufrido un enorme desgaste político y ha quedado profundamente desacreditado. La actitud inmovilista del gobierno de Ignacio González no se debe por tanto a que tenga una posición de fuerza. La petición al gobierno central de la regulación del derecho de huelga, es decir, de limitarlo y cercenarlo para frenar la lucha de los trabajadores revela el carácter profundamente reaccionario de este gobierno, pero también su debilidad y miedo ante una creciente movilización social.

Aunque la huelga en la sanidad ha sido desconvocada por el momento, los médicos ya han advertido que la lucha continúa, sin descartar nuevos paros en enero y febrero y convocándose una manifestación para el 7 de enero. Además, a finales de diciembre, tras la aprobación del decreto, 139 equipos directivos de Centros de Salud de un total de 160 ya han planteado su dimisión en bloque, y la lista puede incrementarse. El conflicto no está cerrado, y todavía existe la posibilidad de echar atrás los planes del PP en Madrid. De hecho, además de la huelga general en Madrid, otra medida clave para darle más fuerza al movimiento, y que ya se está planteando desde diversos sindicatos sanitarios es "nacionalizar" el conflicto, es decir, generalizarlo a nivel estatal, teniendo en cuenta que ya existen ataques de la misma envergadura en otras comunidades autónomas como Catalunya o la Comunidad Valenciana, y que allí donde no existen, tal y como ocurrió con la Educación, acabarán materializándose en el mismo sentido que en Madrid.

\* Según el sindicato CSIT-UP.

## El gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa

Marx y Engels, *El Manifiesto Comunista*

Se cumple un año de gobierno de Mariano Rajoy. Doce meses de infamia, mentiras y corrupción, de arrogancia insultante y añoranza del franquismo, en que el PP ha socavado una parte fundamental de las conquistas obtenidas décadas atrás gracias a duras luchas, huelgas y manifestaciones masivas. Pero esta reacción extrema, que se endurecerá en 2013 como consecuencia de la depresión que vive la economía capitalista en el Estado español, amenaza con desencadenar a su vez, en un lapso de tiempo difícil de determinar de antemano, una crisis política de un calado revolucionario. En el año que ha transcurrido, la clase obrera ha hecho frente a este vendaval con huelgas generales, movilizaciones y manifestaciones de una dimensión formidable: mes tras mes, millones hemos abarrotado las calles de todo el Estado, hemos paralizado la vida económica, y desnudado el gran fraude de la sociedad en la que vivimos. Lo llaman democracia pero, en realidad, no es más que la dictadura del capital financiero cubierta de un ropaje parlamentario.

### Capitalismo parasitario y financiero. Un gobierno hecho a su medida

El capitalismo español atraviesa la crisis más importante de sus últimos setenta años. Basta un dato. La formación bruta de capital fijo, es decir, la tasa del capital dedicada a la inversión productiva, ha sufrido un colapso asombroso: cayó en 2008 un 4,7%; en 2009, 16,6%; en 2010, 6,3%; en 2011, 5,1% y la previsión para 2012 es de un 5,5%. ¡En cinco años una caída del 38,2%! En contraste, la fuga de capitales entre junio de 2011 y junio de 2012 fue de 296.000 millones de euros, ¡equivalente al 27 % del PIB!

Estas cifras revelan muy bien el sabotaje de los capitalistas a la economía productiva. Cuando desde el gobierno, desde el PSOE y, lamentablemente desde las direcciones sindicales y de IU, se insiste en que hay que “adoptar” medidas que favorezcan el empleo y la inversión en la producción, pero sin romper con el sistema, cabe preguntarse ¿por qué los capitalistas no lo hacen? ¿Por qué se empeñan en no aplicar las sugerencias de los portavoces parlamentarios y sindicales? La respuesta a esto es concreta. Los capitalistas invierten no por amor al prójimo, a los parados, a los jóvenes que buscan su primer empleo. No, así no funciona el capitalismo. Ellos invierten su capital si consideran que el beneficio está asegurado, si obtienen un lucro satisfactorio en el menor tiempo posible. Pero si la economía mundial está sumida en una crisis de sobreproducción sin parangón desde 1929, cuando la escasez brota de la sobreafluencia de mercancías, bienes y servicios que no encuentra una realización en el mercado, cuando se cierran empresas en todos los sectores, y el consumo se deprime, no hay ninguna razón para que los dueños del capital inviertan en el proceso de la producción. Por el contrario, buscan acomodo en otras actividades más rentables aunque sus efectos provoquen nuevos y mayores desequilibrios y una desigualdad creciente e insostenible.

El PP y Rajoy asumen la mecánica del capitalismo sin complejos. No en vano su política de “austeridad” persigue aumentar los beneficios de la banca y las grandes empresas, y asestar un golpe decisivo a la clase obrera, a sus derechos, salarios y a su capacidad de resistencia. Sus “reformas” han supuesto, para empezar, un tajo sin prece-

dentos al gasto social, a la plusvalía diferida, que los trabajadores no obtienen directamente en salarios pero sí en servicios y prestaciones de todo tipo; alientan grandes negocios para los monopolios privados gracias a una nueva oleada de privatizaciones en sectores esenciales e irrenunciables para la población (como la educación y la sanidad); a través de reformas legales refuerzan el poder de los empresarios —como propietarios colectivos de la fuerza de trabajo asalariada— en las fábricas y también ante los tribunales (que por otra parte se privatizan para que los trabajadores no podamos acceder a ellos). Todo esto se complementa con el saqueo de las finanzas públicas —y el pago de intereses de la deuda, que en 2013 alcanzarán los 38.600 millones de euros (un 33,8% más que en 2012)—, en beneficio de los responsables de la crisis: el sector financiero y los grandes plutócratas.

¿Se puede ser más escandalosamente mentiroso que el ministro De Guindos, que Rajoy, que todo este gobierno de reaccionarios, cuando exigen austeridad y nuevos sacrificios acusando a los ciudadanos de a pie de haber vivido por “encima de sus posibilidades”, mientras permite a los bancos estafar a un millón de familias con las *preferentes* o desahuciar a más de trescientas mil, y además premia a estos parásitos con constantes inyecciones de capital, amnistías fiscales, con la compra de sus inmuebles invendibles, y aplaude las indemnizaciones multimillonarias que obtienen al abandonar tranquilamente sus cargos después de falsear los libros contables? Así es y así funciona el sistema en su fase de degeneración senil, en la época del capitalismo monopolista de Estado. Su putrefacción representa la putrefacción de la sociedad contemporánea, de sus gobiernos, de su justicia, de su moral, de sus instituciones (que ahora revelan mejor que nunca hasta qué punto están subordinadas a las grandes empresas y bancos).

### Hundir a los trabajadores en la pobreza

En 2012 se han evaporado cada día más de 2.000 empleos, y según Eurostat, la oficina estadística de la UE, a la altura de noviembre el desempleo alcanzó la cota del 26,6%, o lo que es lo mismo, 6.157.000 personas en paro. Más de 1,7 millones de hogares españoles, según la última Encuesta de Población Activa, tiene a todos sus miembros parados, y solo el 67% de los registrados en las oficinas de empleo reciben alguna prestación. Pero la sangría no va a detenerse en 2013. Las medidas en marcha, con la reforma laboral como ariete, provocarán un aumento de decenas de miles de nuevos parados en la empresa privada y en el sector público, donde se han destruido más de 70.000 empleos el año pasado.

El crecimiento de este “ejército de reserva”, y las reformas y medidas aprobadas por el PP, ha hecho retroceder el poder adquisitivo de los trabajadores a los niveles de 1985. Según la OCU, tres de cada diez trabajadores cobran ahora entre un 1% y un 10% menos que hace un año, mientras que uno de cada diez ha visto reducido su salario en más de un 20%. Sólo un 37% ha mantenido su salario durante los últimos doce meses. Entre los jubilados, el 35% cobra entre un 5% y un 10% menos que un año atrás, y el 8% entre un 10% y un 20% menos. El empobrecimiento de la clase obrera también se nutre del aumento escandaloso de los precios de productos y servicios básicos. En el último año el recibo de la luz ha subido cuatro veces (en total un 17%, y

2012

Doce meses de GOBIERNO INFA

2013

Continu hasta tu



un 70% de incremento desde 2008). Pero la luz no es ninguna excepción: la subida del precio de los transportes públicos es igual de brutal, como los incrementos de las tarifas del agua, del IBI, de los peajes, los alimentos y un largo etcétera.

Las consecuencias de todo lo anterior son obvias. Según un informe del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), elaborado a partir de datos oficiales, la tasa de precariedad en España, que incluye núcleos familiares con ingresos conjuntos iguales o inferiores a 12.000 euros brutos anuales, así como familias sin ingresos, afecta a un total de 20,6 millones de personas, es decir, ¡al 43,7% de la población! Esta pauperización creciente de la población tiene su contrapunto en la acumulación de riqueza en el otro polo: el 10% de los más ricos disfrutaban del 63% de la renta global española (solo 200 españoles multimillonarios poseen 145.800 millones de euros de patrimonio). “Gobernar, a veces, es repartir dolor”, señaló hace unas semanas con toda la desenvoltura del mundo el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Lo están consiguiendo sin duda: no sólo han repartido un gran sufrimiento, lo que en realidad hacen es ejercer una gran violencia contra la mayoría. Es una guerra real, pero no declarada oficialmente.

### La hoja de ruta del gobierno de Rajoy para 2013

Las tendencias hacia la depresión de la economía española se refuerzan, tal como reconocen los organismos económicos internacionales, que empeoran las previsiones del

gobierno notablemente: tras una contracción del 1,3% del PIB en 2012, la OCDE y el FMI estiman para 2013 una caída del 1,4% o 1,3%, y ¡una tasa de paro del 26,9%, superior a la de 2012!

“Dados los importantes riesgos que se han acumulado, son urgentes medidas políticas decisivas en todos estos frentes” afirma el último informe de la OCDE. ¿Y cuáles son esas medidas urgentes? Aumento del IVA a más bienes y servicios; una nueva reforma de las pensiones para alargar la edad de la jubilación y rebajar su cuantía; otra reforma laboral, con un contrato único y que recorte las indemnizaciones por despido... Por tremendas que parezcan, estas “sugerencias” forman parte de la hoja de ruta del gobierno de Rajoy para 2013 y se complementan con otras que están en su bandeja de salida: el copago sanitario total; despedir a miles de funcionarios y empleados públicos (algunas cifras que se barajan hablan de un 20%); profundizar en los recortes en las prestaciones de desempleo, jubilación y viudedad, que ya se han puesto en marcha en 2012; privatización de la educación y la sanidad gracias a la aplicación de la LOMCE y a decretos como el del Gobierno regional de Madrid...

Esta política de esclavización de la clase obrera tampoco garantiza que el gobierno no se vea obligado a solicitar el “rescate” financiero a la UE. Si no lo han hecho hasta el momento es por el miedo a una escalada en la lucha de clases mayor todavía que la de este último año. Hace pocas semanas el ministro de Economía, Luis de Guindos, admitió que el Gobierno estaba “mirando” la posibilidad de solicitarlo y señ-



UN  
ME



# Continuar la lucha para tumbar al PP



lío: “Los tiempos también son importantes. Hay que elegir la mejor decisión en el mejor momento posible”. En efecto, echar gasolina sobre un incendio no suele ser una buena idea.

**Continuar la lucha hasta tumbar al PP y levantar una alternativa socialista a la catástrofe capitalista**

Nadie puede decir ya que los trabajadores, que la juventud no estamos dispuestos a luchar con todas las consecuencias. En todas las grandes acciones de masas del año que acaba de concluir se ha sentido el impulso desde abajo: los dirigentes sindicales han ido a rebufo de los acontecimientos, obligados a convocar dos huelgas generales —que han sido un éxito rotundo— después de ser presionados por un movimiento de protesta que les ha desbordado constantemente. El problema no es de fuerza, ni de decisión. El ejemplo de la marea verde, de los mineros, de los jornaleros, de los estudiantes, de los empleados públicos, de los del transporte urbano, de la sanidad madrileña, de innumerables empresas privadas, es atronador. Pero los trabajadores deben enfrentarse no sólo a la derecha y la patronal, también tienen que superar el obstáculo de unos dirigentes que todavía están petrificados por la política de la “paz social”, del “diálogo y pacto social” ideas que, en los hechos, sirven como fuerza auxiliar al gobierno y los empresarios.

Tras la huelga general del 14-N y las manifestaciones multitudinarias de ese día, los dirigentes de CCOO y UGT han vuelto a

recurrir a un guión muy conocido. En lugar de mantener la continuidad de la lucha, endurecerla y extenderla, a través de un calendario concreto de nuevas huelgas generales con el objetivo irrenunciable de echar atrás la contrarreforma laboral, la LOMCE, los recortes sociales, y dar un paso al frente exigiendo la renuncia del gobierno, se han centrado en reclamar un “referéndum” —que es un repliegue sobre el nivel de movilización alcanzado— y en mendigar la vuelta al “diálogo social”. Y si estallan conflictos sectoriales de envergadura que se pueden convertir en un punto de referencia, parece que su único interés es liquidarlos lo antes posible.

Cuando la dirección de Iberia anunció un ERE que supondrá la destrucción de 4.500 empleos y una reducción en torno al 40% de los salarios, CCOO y UGT amagaron con una convocatoria de huelga suspendida inmediatamente tras la presión del gobierno, la empresa y los grandes medios de comunicación. En lugar de basarse en la fuerza de los trabajadores de Iberia, en su capacidad para paralizar el tráfico aéreo y los aeropuertos de todo el Estado, en el ambiente que existe a favor de la lucha contra los despidos para desatar un movimiento de solidaridad, los dirigentes sindicales han aceptado los planes de la empresa sólo que troceándolos a lo largo de los próximos dos años. Algo muy parecido ha ocurrido con la lucha de Paradores Nacionales. Después de varias jornadas de huelga que fueron un éxito de participación, las direcciones de CCOO y UGT firman un acuerdo que implica, en esencia, aceptar las exigencias del gobierno: 350 despidos, el cierre del

Parador de Puerto Lumbreras y que 27 centros sufran cierres parciales por periodos de dos, tres o cuatro meses, además de la clausura de 13 restaurantes.

En la reconversión que sufre el sector bancario, la estrategia de las federaciones de CCOO y UGT es similar. La dirección de la Bankia “nacionalizada”, nombrada a dedo por el PP, ha puesto encima de la mesa 6.000 despidos, el cierre de mil sucursales y una reducción salarial en torno al 50%, cumpliendo las condiciones impuestas por Bruselas para proporcionar liquidez. En el caso del Banco de Santander la cifra de despidos será de 3.000 trabajadores. En el conjunto del sector bancario, se destruirán 55.000 puestos de trabajo entre 2008 y 2015, según los planes puestos en marcha. ¿Cuál es la actitud de los dirigentes de CCOO y UGT ante esta salvajada? Lejos de plantear una respuesta contundente, comenzando por un plan de huelgas generales en el sector, imploran negociar con una clara disposición a aceptar los despidos pero en “condiciones no traumáticas”, es decir, con algo más de indemnización y con algunas prejubilaciones.

Las direcciones de CCOO y UGT, carentes de una alternativa coherente a la crisis capitalista, aceptan su lógica de una manera irrefutable. Pero su acción va a contrapelo del sentir de los trabajadores y de su nivel de conciencia, de la actitud que millones han demostrado en esta lucha de clases sin cuartel. En sectores donde las cúpulas sindicales tienen menor influencia para imponer sus políticas, los conflictos adquieren una dinámica notablemente diferente. En el caso de la sanidad madrileña, la movilización ejemplar contra la privatización ha destacado por derecho propio gracias a constantes asambleas, participativas y democráticas (que tan poco gustan a los burócratas); por una presencia multitudinaria, tanto de trabajadores como de pacientes y población en general, en las huelgas, en los encierros de hospitales y ambulatorios, en las manifestaciones; por haber ganado la batalla de la opinión pública madrileña... Sin duda, esta movilización que se suma a las 62 huelgas y 2.500 manifestaciones registradas en la capital del “reino” a lo largo de 2012, han supuesto el mayor desgaste del gobierno del PP en Madrid en veinte años.

La posibilidad de una victoria está al alcance de la mano, y la clave está en unificar la lucha de la sanidad pública, con la enseñanza pública, los trabajadores de Metro, de la EMT, de Telemadrid, de la recogida de basuras, del Ayuntamiento..., en una huelga general de 24, 48 o de 72 horas en la comunidad madrileña hasta que el PP retroceda. Y el efecto de un triunfo semejante no se le escapa a nadie: actuaría como una descarga eléctrica para el movimiento obrero de todo el Estado y un golpe del que la reacción no se podría reponer.

Una estrategia de este tipo significa partir de que la mejor defensa de las conquistas que nos quieren arrebatar es pasar a una política ofensiva, confiar plenamente en la capacidad de lucha de los trabajadores, y defender una alternativa revolucionaria, socialista, frente a la crisis del capitalismo y los ataques del PP, que generalice y dé un contenido acabado a las conclusiones que millones de trabajadores están sacando de su experiencia cotidiana. Obviamente, las actuales direcciones sindicales, imbuidas de prejuicios, infectadas por los clichés de la opinión pública burguesa, hinchadas por la rutina ofinesca y acomodada al calor de los despachos, son completamente refractarias a esta política.

Recientemente, Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CCOO, planteó que en el mes de marzo habrá nuevas movilizaciones en la UE contra los recortes. Las declaraciones las hizo en el X Congreso de CCOO de Catalunya y fue muy sincero a la

hora de trasladar sus inquietudes: “Nos gustaría más trabajar en un escenario de negociación, pero las puertas están cerradas aquí y en Europa. Por tanto vamos a intentar abrir este espacio desde la movilización social”. Por supuesto, descartó que esa movilización acabe en una nueva huelga general en el Estado español (ya nos tiene acostumbrado a esto), y pidió a los partidos de izquierda que “tomen el testigo del activismo que llevan a cabo los sindicatos en la lucha contra los recortes”, pues según Toxo: “el sindicalismo no lo puede todo ni cabe cargarle con esta responsabilidad”. En el mismo discurso reclamó “un plan Marshall del siglo XXI” para ayudar a los países en peores condiciones de la UE.

Un burócrata es un pillo redomado, y un gran burócrata lo es en una proporción mucho mayor. Toxo, en sus declaraciones, revela sin tapujos la psicología del aparato sindical: “¡Basta ya de tanta movilización! ¡Lo nuestro es negociar, ahí es donde nos encontramos cómodos! ¡Que otros tomen el testigo!”. Bonita manera de sacudirse responsabilidades. En cualquier caso, Toxo podría señalar qué política deberían adoptar las direcciones del PSOE y de IU. Pero no lo hace por la sencilla razón de que la política de los dirigentes del PSOE, y en gran medida de muchos en IU, es la misma que defienden las cúpulas de CCOO y UGT, y que se resume en: ¡Un plan Marshall para Europa! ¡Refundar la UE sobre bases piadosas, y consideradas con los trabajadores y los pobres! Hace más de 150 años, cuando Marx y Engels escribieron *El Manifiesto Comunista* también se refirieron a aquellos socialistas (los llamaban “socialistas burgueses”) que “quieren perpetuar las condiciones de vida de la sociedad moderna sin las luchas y los peligros que surgen fatalmente de ellas. Quieren la sociedad actual sin los elementos que la revolucionan y la descomponen”. ¡Qué bonito sería un Plan Marshall para Europa! ¡Y que la CEOE fuera razonable, amiga de los trabajadores, y entendiéndose que debe aceptar una distribución más justa de la riqueza! Para disgusto de Toxo, de Méndez, de Rubalcaba, de todos los reformistas del mundo que anhelan los buenos días del “capitalismo progresivo”, vivimos la era de la descomposición del régimen burgués; de una guerra social que destruye el bonito y cuidado jardín de la colaboración de clases, que sitúa en primer plano la dominación autoritaria del capital financiero, que pone en entredicho las formas de la democracia parlamentaria, de la libertad de expresión, de organización, de huelga, incompatibles de forma creciente con el mantenimiento del orden capitalista.

El sindicalismo muestra todas sus limitaciones cuando renuncia a la lucha política por la transformación socialista de la sociedad. La primera tarea de los trabajadores y los jóvenes con conciencia de clase es comprender que no hay ninguna medicina “democrática” para un sistema podrido. Que la protesta masiva que se está desarrollando contra las políticas de ajuste, de recortes sociales, contra los desahucios y la privatización de la enseñanza y la sanidad pública, para que tenga éxito, debe convertirse en organización política consciente. Es necesario levantar la bandera del socialismo en el seno de nuestros sindicatos de clase, de nuestras organizaciones políticas de clase, forjar una fuerte tendencia marxista revolucionaria que hable caro a los trabajadores y la juventud, para oponer a la barbarie capitalista una alternativa socialista: la expropiación del capital financiero, de la banca y los monopolios, bajo el control democrático de los trabajadores, como paso decisivo para conquistar unas condiciones de vida dignas y el pleno empleo, defendiendo nuestros servicios públicos esenciales y estableciendo las bases materiales para una auténtica democracia de la mayoría.

Javi Losada

Delegado por Ferrol a la X Asamblea

Los pasados 14, 15 y 16 de diciembre celebramos la X Asamblea Federal de IU que reunió en Madrid a mil delegados. Los marxistas de EL MILITANTE hemos participado en este debate con varias enmiendas\* que abordan, en primer lugar, la idea de que el socialismo es mucho más que una frase en un documento, y que necesitamos defender un programa concreto para la transformación de la sociedad. Reivindicamos a su vez que IU debe tener una posición clara en el movimiento sindical, defendiendo un sindicalismo de clase, combativo y democrático frente a la política de pactos sociales y desmovilización que ha sido la práctica habitual de las direcciones de CCOO y UGT. También hemos abordado aspectos fundamentales como una política de independencia de clase en la cuestión nacional, el derecho a una vivienda digna o la reforma agraria integral a través de la expropiación de los latifundios. Y, hemos incidido en que no puede haber contradicciones entre nuestro discurso político y la actuación de los dirigentes de IU en las instituciones; sin duda, uno de los puntos centrales del debate.

De hecho, una de las principales preocupaciones de un sector significativo de los delegados ha sido la situación en Extremadura y Andalucía. Ya en el debate en plenario del informe presentado por el coordinador general se demostró que entre la base de la organización existe una fuerte oposición a las políticas practicadas por las direcciones andaluza y extremeña, como probaron el entusiasmo y los aplausos con que una parte considerable de la Asamblea acogió las intervenciones críticas con dichas actuaciones.

### Defender los intereses de la clase obrera dentro de los parlamentos

Esta sensación que muchos delegados tuvimos en el plenario del viernes se confirmó cuando la comisión encargada de discutir las enmiendas al documento político votó a favor de la enmienda en la que los marxistas

## La X Asamblea de IU exige un cambio de política en Andalucía y Extremadura



planteábamos que estas dos actuaciones debían ser corregidas. Por un lado, la practicada en Extremadura, donde los diputados de IU colaboran con el gobierno del PP facilitando la aplicación de su política de recortes sociales. Por otro, Andalucía, donde el gobierno de coalición con el PSOE se está traduciendo en pocos meses en una serie de medidas y decretos de recortes. En concreto, después del tizeretazo de 2.700 millones de euros en el ejercicio de 2012, los presupuestos presentados para 2013 incluyen unos recortes de mil millones en sanidad, más de 600 en educación y una reducción del 30% en políticas sociales y desempleo. Por el contrario se incrementan los fondos destinados al pago de la amortización y los intereses de la deuda pública un 60%.

En resumen, esta enmienda presentada por los compañeros de IU de Villaverde del Río en las asambleas de Sevilla y Andalucía y defendida por Santiago Jiménez, alcalde de dicha localidad, conmina a los diputados de Extremadura "a abandonar de forma inmediata su *pacto de facto* con el PP" y a los diputados en la junta de Andalucía a votar en contra de los presupuestos de recortes y "a romper cuanto antes esta coalición de gobierno para ponerse al frente de la movili-

zación contra todo tipo de recortes de los gastos sociales, los salarios y los derechos laborales, vengan de donde vengan".

### Debe aplicarse la voluntad de la Asamblea

La resistencia de las direcciones regionales de Andalucía y Extremadura está evitando que la enmienda aprobada, más allá de su posterior incorporación a la ponencia oficial, tenga el efecto deseado por los delegados. Si IU está avanzando en sus resultados electorales es fundamentalmente porque los trabajadores necesitan más que nunca una organización que defienda sus intereses. Por eso, más allá de cuestiones prácticas o de coherencia, lo realmente importante es tener claro que nuestra base electoral espera que resolvamos sus problemas cuando ocupemos las instituciones y no que apliquemos los mismos recortes que la derecha.

Consideramos un error el enfoque que en la asamblea aportó Diego Valderas (coordinador de IU en Andalucía) basado en que "una cosa es el debate abstracto y otra muy diferente gobernar". Posiciones de este tipo, defendidas por su carácter *pragmático*, provocarán el desencanto de nuestra base

social, ya hemos visto el batacazo que se ha llevado el PSOE en las elecciones generales de 2011 tras aplicar dichas políticas de recortes. Y, lo más importante, dificultan nuestro desarrollo como un referente revolucionario y anticapitalista que pueda atraer a sus filas a los sectores más combativos de la clase obrera y la juventud. Este tipo de políticas no hacen otra cosa sino contribuir a asentar la idea de que no hay alternativa al programa de recortes que nos ofrece la burguesía.

### La actitud ante los sindicatos también preocupa a las bases

El debate sobre las políticas concretas que estamos realizando no solo discurre sobre los ejemplos citados, en menor medida se abordó la política de alianzas con el resto de la izquierda (con especial atención al ejemplo gallego de Alternativa Galega de Esquerdas, AGE), la relación entre nuestra organización y el movimiento 15-M y 25-S o el papel que debe jugar IU ante la falta de combatividad de los sindicatos de clase, terreno en el que los marxistas defendimos la necesidad de que IU no se limite a acompañarlos sino que contribuya a provocar un giro a la izquierda en los mismos.

Finalmente decir que la participación en la asamblea ha confirmado las ganas de luchar que tienen las bases de la organización. El ambiente entre muchos delegados era de ilusión ante las perspectivas de lucha, y se notaba que había ganas de discutir sobre la mejor estrategia para abordar dicha lucha. Los marxistas de EL MILITANTE no solo aportamos nuestro granito de arena en el debate de las enmiendas, también contribuimos con la difusión de nuestras ideas a través de la venta de nuestro periódico y de los libros de la Fundación Federico Engels con muy buenos resultados.

\* En [www.elmilitante.net](http://www.elmilitante.net) se pueden leer todas las enmiendas presentadas.

### Sindicato de Estudiantes

La nueva contrarreforma educativa del PP y los recortes que contra la educación pública lleva adelante, diligentemente, el ministro José Ignacio Wert han puesto en pie de guerra a toda la comunidad educativa, pero no todo el mundo está descontento. También hay quien se frota las manos sin disimulo. Así los empresarios de la escuela privada-concertada han sacado el compromiso del gobierno del PP de aumentar las facilidades para elaborar conciertos educativos más duraderos y con más posibilidades de negocio. Es decir, que a la vez que se recortan miles de millones de euros a sanidad, educación y demás servicios públicos, se crean las bases para desviar miles de millones de euros de dinero público a manos privadas, engordando así un lucrativo negocio que hace crecer las abultadas carteras de una minoría a costa de la escuela pública y los intereses de la mayoría.

### La más beneficiada, la Iglesia

El otro sector que da saltos de alegría con la nueva contrarreforma es la Conferencia Episcopal que, de ser aprobada, verá cómo la asignatura de religión pasará a ser evaluable y a contar en el expediente académico del estudiante. Medida que se completará con la creación de una nueva asignatura alternativa, y que como todo el mun-

## Patronal y Conferencia Episcopal: los grandes beneficiados de la LOMCE

do puede suponer será mucho más difícil que la de religión, desanimando su elección y promoviendo la opción religiosa. Al fin y al cabo, el asunto será sencillo: si alguien quiere ver inflado su expediente académico, y no una merma en su nota, ya sabe lo que tiene que hacer: "elegir" matricularse en la asignatura de religión.

A nadie se le escapa que lo más razonable sería sacar de una vez por todas la religión de las aulas y dedicar ese tiempo, y cuantiosos recursos económicos, para reforzar asignaturas troncales o en las que los alumnos tienen más dificultades para facilitar la progresión en el sistema educativo. Si esto no se hace es porque las medidas lanzadas por el Ministerio de Educación tienen un fuerte componente ideológico reaccionario, fomentando el modelo de una escuela de calidad para el que pueda pagársela, frente a la universalización y gratuidad de la misma, además de apoyar el adoctrinamiento religioso desde la escuela y, de paso, blindar las prácticas "educativas" más aberrantes, como la segregación por razones de sexo dentro de las aulas. Algo que el propio ministro ha asegurado que permitirá la nueva ley.

Pero también hay mucho dinero cantante y sonante en esta operación con el que seguir llenando las arcas de la Iglesia Católica con fondos públicos. Un detalle nada desdeñable a recordar es que el 80% de la escuela privada-concertada está en manos de la jerarquía de la Iglesia Católica. Una Iglesia Católica que este curso recibió del gobierno de Esperanza Aguirre (aunque no es el único caso en el Estado) para sus centros de estudio más extremistas, adscritos a Comunión y Liberación, Legionarios de Cristo y Opus Dei, más de 25 millones de euros<sup>1</sup>, cantidad equivalente a los 26 millones de euros que la misma Comunidad de Madrid retiró este mismo curso para las becas de comedor y libros a las familias más desfavorecidas<sup>2</sup>.

Atendiendo a los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, también poco antes del inicio de este nuevo curso, las cifras globales de dinero público que se dedican a las subvenciones al conjunto de la escuela concertada podrían rondar los 5.900 millones de euros<sup>3</sup>. ¡To-

do un negocio! Pero un negocio para muy pocos, puesto que incluso aquellos padres que deciden enviar a sus hijos, o se ven obligados a ello por la falta de plazas públicas, a la escuela concertada se encuentran con que el gasto derivado de la matriculación de sus hijos en estos centros es hasta un 70% más caro que en la escuela pública<sup>4</sup>.

1. [www.elplural.com](http://www.elplural.com) (17/11/2012).
2. [www.elpais.com](http://www.elpais.com) (18/05/2012).
3. Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada del INE.
4. Informe de la OCU, septiembre de 2012.



## ¡Basta ya de criminalización!

**Los Mossos d'Esquadra se personan en casa del secretario general del Sindicat d'Estudiants de Catalunya por su participación en un piquete en Cornellá el 14-N**

Sindicat d'Estudiants y CCOO y UGT del Baix Llobregat

El 3 de diciembre los Mossos d'Esquadra se presentaron en el domicilio de Borja Latorre, secretario general del Sindicat d'Estudiants de Catalunya, y en la de otro miembro de la comisión ejecutiva del SE, para llamarles a declarar en comisaría por su participación en un piquete informativo en la huelga general del 14-N en Cornellá. Ese día, varios afiliados del Sindicat d'Estudiants, entre los que se encontraba Borja Latorre, fueron abordados por un numeroso grupo de Mossos d'Esquadra cuando se dirigían a sus casas tras participar en el piquete informativo.

Los compañeros fueron retenidos e identificados por los agentes, que les acusaron de haber hecho pintadas, algo que no ocurrió, y que en cualquier caso no puede ser excusa para incriminar a la juventud que lucha.

### Acoso contra los que luchamos

Más de quince días después, los compañeros han recibido llamadas telefónicas desde números ocultos durante la noche, han sufrido visitas a domicilio de agentes con el objeto de alarmar a sus padres y familiares, a la vez que han sido amenazados en varias ocasiones con ser detenidos y retenidos en los calabozos de comisaría, todo esto sin existir ningún requerimiento judicial ni prueba al respecto. Un verdadero escándalo que forma parte de la brutal campaña de criminalización que sufrimos quienes nos movilizamos en defensa de nuestro futuro y contra los ataques de la derecha, tanto del PP como de CiU, a la clase trabajadora y los jóvenes.

Desde el Sindicat d'Estudiants denunciamos esta campaña de persecución y acoso. El Departament d'Interior, con Felip Puig a la cabeza, se ha destacado en esta ofensiva que intenta, por la vía de la represión policial, amedrentarnos y cercenar nuestros derechos democráticos de expresión, reunión, manifestación y huelga. Lo pudimos ver en el desalojo brutal de la Plaza de Catalunya, contra los acampados del 15-M; lo hemos visto en numerosas manifestaciones, donde la infiltración policial previa a los disturbios es una constante; y lo hemos vuelto a ver en el 14-N, con escenas brutales de represión como la del estudiante de 13 años golpeado en Tarragona, o la trabajadora que perdió un ojo en Barcelona fruto de la salvaje intervención policial.

Por todo ello, desde el Sindicat d'Estudiants exigimos al departament d'Interior que cese en su persecución policial y judicial contra activistas de la izquierda, contra sindicalistas, trabajadores y estudiantes que luchan contra los recortes. Exigimos también la libertad y retirada de cargos contra todos los afectados por las detenciones y denuncias por su participación en la huelga general, así como la dimisión del conseller d'Interior por su responsabilidad directa en estas actuaciones antidemocráticas.

# En defensa de la educación pública en catalán, contra la segregación lingüística, contra el enfrentamiento en líneas nacionales

Sindicat d'Estudiants

El ministro Wert se desmarcó antes de Navidad anunciando un nuevo borrador de la LOMCE (contrarreforma educativa) que supone otra vuelta de tuerca contra la enseñanza pública y una ofensiva brutal contra las lenguas cooficiales propias: catalán, gallego y euskera, que busca marginarlas del sistema educativo.

En nuevo borrador de la LOMCE reduce las lenguas cooficiales a la categoría de "especialidad", equiparándolas en realidad a una materia optativa, sin un tiempo mínimo asignado para su aprendizaje y jerarquizándolas en cuarta posición tras el castellano y dos lenguas extranjeras. Además, basándose en varias sentencias reaccionarias de los tribunales, el nuevo borrador establece que la enseñanza de las lenguas cooficiales tiene que estar "equilibrada" en el número de horas lectivas, garantizando que los padres puedan elegir como lengua vehicular el castellano. En el caso de que no hubiera plazas públicas o plazas privadas concertadas en castellano, se subvencionaría la plaza en la educación privada de élite.

La LOMCE apoya por tanto la política reaccionaria en materia lingüística que lleva adelante la Xunta de Galicia (gobernada por el PP), que margina al gallego, y consagra el modelo de segregación en líneas lingüísticas del País Vasco, que divide a los estudiantes en castellanoparlantes y euskaldunes. Pero el verdadero objetivo de la LOMCE en materia lingüística es destruir el actual modelo de inmersión lingüística en catalán. Todas estas medidas supondrán introducir en Catalunya la segregación lingüística de los estudiantes.

El PP, una y otra vez, trata de presentar de manera distorsionada la realidad lingüística existente en Catalunya, donde no existe hasta el momento ningún problema lingüístico. La inmensa mayoría de la población catalana defiende el modelo de inmersión lingüístico conquistado en las luchas contra la dictadura franquista. Este modelo, que no impide el aprendizaje del castellano —como demuestra que todos los catalanes hablan y escriben perfectamente este idioma—, evita la segregación en líneas lingüísticas de los estudiantes y apoya un idioma como el catalán, que históricamente ha sido perseguido y que sigue en el punto de mira de la derecha españolista. Varias pruebas confirman este análisis: pese a toda la campaña propagandística del españolismo, sólo catorce familias de toda Catalunya han demandado a la Generalitat que la lengua vehicular de sus hijos en la enseñanza sea el castellano. Además, todas las pruebas de nivel, selectividad o pruebas externas demuestran que los estudiantes catalanes dominan el castellano tan bien como lo pueden hacer los estudiantes del resto del estado.



No nos engañemos. Al PP no le importa en absoluto el aprendizaje del castellano. El PP está impulsando brutales recortes a la educación pública en todo el Estado. Esos recortes sí que merman el aprendizaje del castellano. Esa es la verdadera naturaleza de la LOMCE, una ley con reválidas, itinerarios, religión obligatoria y un retroceso de la educación pública a los niveles de la enseñanza franquista.

CiU, fiel representante de la burguesía catalana, no es nuestro aliado en la defensa de la educación pública en catalán y contra la segregación en líneas lingüísticas. CiU comparte con el PP el objetivo de privatizar la educación y degradar la educación pública. CiU, junto al PP, lleva dos años de continuos recortes, atacando la calidad de la educación pública y suprimiendo los derechos democráticos dentro y fuera de las aulas. Al día siguiente de las elecciones autonómicas, CiU anunció un recorte adicional de 4.000 millones de euros para

2013 que sin duda afectará una vez más a la educación pública.

El PP ataca los idiomas cooficiales propios para mantener agrupada a su base electoral más reaccionaria y tratar de que sus ataques y recortes sociales pasen más desapercibidos. Además, busca introducir el veneno reaccionario del españolismo distorsionando la realidad y engañando a la población de fuera de Catalunya. Pero a CiU también le interesa polarizar la vida política en líneas nacionales para ocultar sus propios planes de ataque y destrucción de lo público. Ambos partidos, que comparten la misma política económica y su servidumbre a los dictados del capital financiero internacional, buscan manipular y exacerbar los sentimientos nacionales para enfrentar y dividir a los trabajadores y los jóvenes.

Sólo la lucha y la movilización en la calle nos permitirá conservar nuestros derechos sociales y democráticos: es el único camino. Por eso, desde el Sindicato de Estudiantes hacemos un llamamiento a las organizaciones de profesores, padres y estudiantes a que se sumen a la nueva semana de lucha (del 4 al 8 de febrero) convocada en todo el Estado en defensa de la educación pública, exigiendo la retirada de la LOMCE y la dimisión de Wert. A las reivindicaciones que ya nos sacaron a la calle en octubre, se suma ahora la defensa de las lenguas cooficiales propias y el rechazo absoluto a la segregación en líneas lingüísticas. No permitiremos que nos dividan, ni que nos segreguen, igual que no permitiremos que nos manipulen y que nos arrebaten un derecho que conquistaron nuestros padres y abuelos: una educación pública y de calidad para todos.

### CiU no es nuestro aliado

Desde el Sindicato de Estudiantes no aceptamos que se destruya la enseñanza pública. Por eso hemos vuelto a convocar una nueva semana de lucha en febrero, con una nueva huelga general de 72 horas los días 5, 6 y 7 de febrero que paralice todos los institutos públicos. También hemos reiterado nuestro llamamiento a los sindicatos de profesores y a la principal organización de padres y madres, CEAPA, a convocar conjuntamente una huelga general de toda la comunidad educativa, que sería la mejor manera de hacer frente a la mayor agresión al sistema educativo público en 35 años.

VIENE DE LA CONTRAPORTADA

Desde el Sindicato de Estudiantes no aceptamos que se destruya la enseñanza pública. Por eso hemos vuelto a convocar una nueva semana de lucha en febrero, con una nueva huelga general de 72 horas los días 5, 6 y 7 de febrero que paralice todos los institutos públicos. También hemos reiterado nuestro llamamiento a los sindicatos de profesores y a la principal organización de padres y madres, CEAPA, a convocar conjuntamente una huelga general de toda la comunidad educativa, que sería la mejor manera de hacer frente a la mayor agresión al sistema educativo público en 35 años.

### Propuestas para la Semana de Lucha:

• **Lunes 4 de febrero:** Asambleas de estudiantes, padres y profesores en los institutos, y encierros para debatir y apro-

## 5, 6 y 7 de febrero Huelga general de estudiantes

bar la plataforma reivindicativa, formar comités de lucha y organizar las jornadas de huelga.

- **Martes 5 de febrero:** Huelga general de estudiantes y organización de piquetes informativos en mercados, centros de salud, plazas, transportes, etc. para dar a conocer las reivindicaciones del movimiento estudiantil. También proponemos la celebración de actos conjuntos informativos con nuestros profesores y padres. La elaboración de pancartas y cartelones para decorar institutos y facultades.
- **Miércoles 6 de febrero:** Huelga general y manifestaciones estudiantiles durante la mañana en todas las ciudades

y localidades, llamando a los compañeros de universidad a sumarse activamente a ellas.

- **Jueves 7 de febrero:** Huelga general de estudiantes y realización de manifestaciones de estudiantes, padres, madres y profesores por la tarde, propuestas a los sindicatos de profesores y a la CEAPA.
- **Viernes 8 de febrero:** Asambleas de balance en los centros de estudio con profesores, estudiantes y padres para decidir las siguientes acciones.

Toda la información en [www.sindicatodeestudiants.net](http://www.sindicatodeestudiants.net)

# Reducción salarial en Pizza Móvil (A Coruña)

**Manu AC**

Delegado sindical de CIG en Pizza Móvil

El pasado mes de noviembre, la empresa anunció al comité de empresa la intención de reducir los salarios del personal de las tiendas un 15,7 %, es decir, una bajada real de entre 50 y 170 euros, dependiendo del tipo de contrato. Lo más habitual es cobrar entre 300 y 400 euros mensuales, con lo que la bajada supondría entre 50 y 60 euros.

## Las condiciones laborales

Así como hacemos y repartimos un tipo de alimentación denominada comúnmente “comida basura”, nuestras condiciones de trabajo (y las de todo el sector) se pueden calificar del mismo modo: basura.

Cobramos menos de 4 euros la hora, siendo la empresa del sector que menos cobra por hora, el plus por reparto es de... ¡30 céntimos!, no se reconocen las categorías como se debiera, las revisiones de las motos brillan por su ausencia, niegan ayudas en los cierres y refuerzos de personal en ciertas horas punta, hacen contratos de “auxiliar” para que puedas hacer de todo por el mismo salario (cobrando menos en la práctica), etc. Y con estas condiciones, la empresa decide reducirnos el salario un 15,7%.

En un principio, hubo unanimidad dentro del comité de empresa (5 de UGT, 2 de CCOO y 2 de CIG) para luchar contra este ataque. En una reunión decidimos realizar asambleas unitarias en todas las ciudades afectadas (franquicias excluidas): A Coruña, Santiago y Ferrol-Narón. Acordamos llevar como comité una propuesta a las asambleas de no aceptar ningún tipo de reducción salarial.

En las tres asambleas realizadas el resultado fue idéntico: el personal trabajador de Pizza Móvil decidió, por clamorosa unanimidad, secundar la propuesta del comité, asumiendo que, seguramente, la empresa no ce-

dería en un principio y habría que movilizarse para impedir la reducción salarial.

## Ruptura de la unidad del comité

Ante la presión de la empresa, que calificó la propuesta de no reducción de poco seria (porque el comité de Pontevedra llevó una propuesta de 8% de bajada en locales y 4% en oficinas), la unidad se rompió. La mayoría de las compañeras del comité de empresa decidió incumplir y desobedecer el claro y unánime mandato de las asambleas y propuso a la empresa una reducción del 2% para personal de base y un 4% para oficinas y oficiales.

Desde CIG-Servizos nos opusimos a esta medida antidemocrática y exigimos su inmediata rectificación: estábamos, entre otras cosas, mandando una señal de debilidad muy peligrosa a la empresa, que conocía perfectamente la decisión unánime de la plantilla de no aceptar reducción alguna.

Ante esa oferta, la empresa decidió asumir, con matices, la propuesta del comité de Pontevedra y propuso un 8% de bajada en locales y un 4% en oficinas. La pérdida, en este caso es, en los contratos más habituales, de entre 20 y 40 euros, partiendo de los salarios de miseria que los capitalistas pretenden imponer a la clase obrera aprovechando la situación de crisis económica de su sistema.

## La alternativa a la reducción: luchar

Ante esta oferta, la mayoría del Comité (6 votos contra 3) decidió dar por buena la propuesta de la empresa y asumirla. También asumieron la posición, los argumentos y las mentiras de la empresa, haciendo suya la idea de que aceptar la bajada era la única solución “realista y posible”.

Se decidió volver a hacer asambleas, esta vez por locales y con votación secreta (co-



mo si tuviéramos algo que ocultar) para que el personal decidiera si aceptaba la oferta de la empresa asumida por la mayoría del comité o no. Desde CIG-Servizos decidimos repartir una hoja animando a votar NO y proponiendo un plan de lucha como alternativa a la sumisión ante la empresa.

Propusimos huelga el día 1 de enero (el de mayores ventas del año) para presionar y hacer valer nuestra fuerza, además de repartos entre la clientela y el resto de la clase obrera, concentraciones delante de las tiendas, unimos a otras empresas en lucha como Paradores o Renfe, rueda de prensa, etc.

Aunque en A Coruña y en Ferrol la mayoría de la plantilla voto NO a la reducción y por tanto SÍ a la huelga (ya que desde CIG vinculamos votar NO con la aprobación de la huelga por ser la única forma, ya que sólo se podía votar SÍ o NO a la bajada salarial), en las asambleas de Santiago se votó SÍ a la reducción. Los resultados totales en la provincia fueron: 39 SÍ, 36 NO y 4 abstenciones.

En las asambleas de Santiago se dieron algunas situaciones “curiosas”, entre las que destacan constantes interrupciones y ataques personales al compañero de CIG que trataba de argumentar en contra de la re-

ducción. Pero hubo más: fueron a votar hasta los responsables y coordinadores de área, es decir, altos mandos; vinieron personas de los locales de A Coruña traídas a propósito para que votaran, es decir, carreteo de votos (los métodos electorales del PP en el rural gallego); vinieron cinco personas del comité de Pontevedra a “explicar” su caso (era una forma de presionar a la gente de Santiago, para que vieran que la situación era grave).

Además, las compañeras del CE que asumieron la propuesta empresarial anunciaron una llamada de la empresa el día anterior informando de que había un comprador para un

local de Santiago (curiosamente en el que trabaja el compañero de CIG), y de que si no aceptábamos la bajada, lo vendían a una franquicia. Surge una pregunta: si el local tiene pérdidas (eso dicen), y esa es una de las razones que supuestamente justifican la reducción ¿cómo hay alguien dispuesto a comprar un local no rentable? Misterios...

## Por un sindicalismo responsable... con la clase trabajadora

Si alguna lección podemos extraer de esta situación es que necesitamos un sindicalismo de verdad, combativo, que respete las decisiones soberanas de las asambleas, que aproveche la predisposición a luchar de los trabajadores, que no asuma los argumentos y la posición de las empresas y luche contra ellos, que impulse las luchas y las lleve hasta el final superando los lógicos miedos de la gente, que entienda que luchando se consiguieron todos nuestros derechos sociales y laborales y que solo luchando se pueden mantener, en definitiva, necesitamos un sindicalismo que defienda de verdad los intereses de la clase trabajadora, irreconciliables con los de la clase empresarial y capitalista.

**Javi Losada, Xaquín Gª Sinda, Carmen Sixto y Vicente Ferrer**  
Ejecutiva de CCOO · Navantia-Ferrol,  
por el Sector Crítico

**A finales de noviembre, Atenasa, compañía auxiliar del astillero Navantia-Ferrol, retiró el despido del compañero Ángel Porto. Aunque la empresa pretendió trasladarlo a su nave en el exterior de la factoría, finalmente la readmisión fue incondicional. Este resultado es muy positivo y debemos sacar sus lecciones porque, evidentemente, no es fruto de las habilidades negociadoras de los representantes sindicales.**

Las fechas y hechos más relevantes del conflicto (a los que hay que sumar diversos paros parciales o de toda la jornada de la plantilla de Atenasa entre los días 19 y 27) fueron:

- 16 de noviembre: despido.
- 19-21 de noviembre: negociaciones.
- El 21, Atenasa amenaza con más despidos.
- 22 de noviembre: primera asamblea general y culebra.
- 23 de noviembre: segunda asamblea general.
- 30 de noviembre: readmisión.

El factor fundamental para conseguir la readmisión fue la culebra del día 22, que paralizó totalmente la factoría durante media jornada. En la asamblea general del día siguiente, el portavoz del comité de empresa dijo que estaban recibiendo llamadas de empresarios de otras compañías, preo-

## Atenasa (Ferrol): ¡la lucha sirve!

### Ángel Porto, readmitido



cupados por la situación. Evidentemente, la culebra preocupó (también a Navantia) porque evidenció que los trabajadores tenían ganas de luchar. Y también les tuvo que preocupar que esa culebra no fuese iniciativa del comité, sino de los marxistas (el comité pretendía limitarse a dar un par de vueltas durante media hora con los delegados de las auxiliares, mientras los trabajadores esperaban pasivamente).

Este resultado demuestra que la patronal no es todopoderosa y que hace falta un sindicalismo combativo. Un sindicalismo que habría dado ya una respuesta contundente el lunes 19, cuando el comité de empresa debió de estar en las puertas a primera hora llamando a una asamblea general y paralizar la factoría. Sin embargo, el comi-

té optó por confiar en la negociación. O mejor dicho, como el propio comité expresó en las dos asambleas generales, por confiar en que el problema... ¡lo iban a solucionar la Dirección de Navantia o los empresarios de las otras compañías!

Un sindicalismo que, cuando da un plazo, lo cumple. El viernes 23 a las 10:30 vencía el plazo dado y estaba convocada la segunda asamblea. ¿Y con qué nos encontramos? Con que la negociación empezó en ese momento y con más de una hora de espera. Cada vez que se plantea la necesidad de movilizarse, el comité justifica sus pocas ganas de hacerlo con el mismo discurso: cuidado, esto va para largo, no podemos desgastarnos, etc., etc. Claro que a ningún trabajador le gusta perder dinero,

pero sobre todo lo que no le gusta es perder dinero para nada. El día de la culebra paramos media jornada, pero los ánimos estaban muy altos porque los trabajadores le dieron un sentido a ese paro. Al día siguiente, sin embargo, a pesar de que el paro fue de hora y media, consideraron una pérdida de tiempo y dinero que el comité nos tuviera esperando sin hacer nada. La cuestión no es sólo cuántas horas paramos, sino sobre todo qué utilidad van a tener esas horas.

Este conflicto demuestra que la clave para obtener victorias es la presión de los trabajadores. Si tenemos claro esto, podemos conseguir cosas. En este sentido, el conflicto de Atenasa debe marcar un antes y un después en la actuación del comité de empresa porque demostró que, ante los ataques, la resignación no es una opción. Las cosas no tienen que ser como quieren las empresas, los trabajadores tenemos fuerza, *sí podemos cambiar las cosas*. El comité de empresa debe adoptar una actitud absolutamente beligerante contra los abusos en las compañías auxiliares.

Sólo un ciego puede no ver que hay que luchar y que es necesario organizarse. Estamos en una nueva época del capitalismo totalmente distinta a la anterior. Los esquemas del pasado ya no sirven, ni en Navantia ni en ningún lado. Esta es la realidad. No es agradable, pero ahí está. De nosotros —de nuestra conciencia, de nuestra voluntad, de nuestra organización, de nuestra lucha firme— depende que siga siendo así o que cambie a mejor.



## Vitrasa (Vigo) cede ante la huelga indefinida

Alberto Fernández

Los trabajadores de Vitrasa, empresa que gestiona en Vigo el servicio de autobuses públicos urbanos, decidieron el pasado 3 de diciembre, después de tres días de huelga, ir a la huelga indefinida, en una lucha contra la precariedad laboral y en defensa de sus condiciones de vida.

### Reivindicaciones concretas

Entre las peticiones iniciales de los trabajadores se encontraban las siguientes: subida salarial del 1%, cifra muy humilde y justa en extremo, más cuando el IPC ya está en el 2,9%; dos días de descanso a la semana; tiempo de descanso en los turnos, particularmente en aquellos que llegan hasta las 10 horas continuadas; 30 días naturales de vacaciones, sabiendo que, en determinadas ocasiones, miembros de la plantilla hayan tenido que esperar más de 15 meses para volver a tenerlas; generar más puestos de trabajo, en lugar de aumentar la explotación de los trabajadores ya contratados; protesta contra la pretensión de la empresa de elevar el precio del billete de autobús en enero, un auténtico escándalo, dado el ya elevado precio de la tarifa ordinaria (1,24 euros), uno de los transportes públicos urbanos más caros de todo el Estado español.

La patronal de Vitrasa, ante las justas reivindicaciones de los trabajadores, apelaba continuamente a la "responsabilidad", "la mala situación económica", la imposibilidad de "empeorar la cuenta de resultados", y las tachaba de inaceptables en un "contexto de crisis económica como el actual". Curiosamente, de lo que no hablaba es de sus beneficios:

	Beneficio	Viajeros
• 2008	3.979.187 €	22.892.059
• 2009	3.188.260 €	22.200.000
• 2010	3.640.605 €	22.000.000
• 2011	4.000.000 €	22.479.598

En resumidas cuentas, la empresa miente y utiliza la excusa de la crisis y el miedo de los trabajadores a perder el empleo como chantaje para atacar sus condiciones de trabajo.

### Servicios mínimos abusivos y el papel del Ayuntamiento del PSOE

El Ayuntamiento de Vigo, gobernado por el PSOE, entrega cada año 12 millones de euros de subvención a la empresa, lo que equivaldría a que cada vigués, antes de poner un pie en el autobús, le esté anticipando 37 euros a la misma. Es con este dato con el que hay que juzgar la solicitud de la patronal de un nuevo aumento del precio del billete.

Por si esto no bastara, tenemos que hacer notar la actitud vacilante y elusiva de la alcaldía del PSOE de la ciudad, la cual, ante la insistencia de los trabajadores para que mediara en el conflicto, particularmente cuando éstos denunciaron los abusivos servicios mínimos, repetía, encogiéndose

de hombros, que "solamente era un problema laboral entre empresa y trabajadores", lavándose completamente la manos. La empresa, con el Concello como cómplice, aplicó unos servicios mínimos de cerca del 40% para las "horas punta", aunque por esta denominación eufemística se comprendiese casi toda la jornada. Además, estos servicios beneficiaban a las líneas que más rentabilidad reportan, dejando a los alrededores de Vigo, estación de tren, servicios de minusválidos, etc., con un 0% de cobertura en algunos casos (la línea 11, una de las que más beneficios reporta a la empresa, tenía servicio del 100% todo el día!). Detrás de esta actitud de la empresa está el intento de hacer recaer la responsabilidad de la huelga y de la ausencia de servicio sobre los trabajadores de Vitrasa, para así aislarlos del resto de la clase trabajadora viguesa y llevar la huelga a la derrota.

### Una importante victoria

El 12 de diciembre, finalmente, concluyó la huelga. El preacuerdo, aprobado por los trabajadores en asamblea, fija una paga de 300 euros lineales y consolidables en 2012 y de 250 en 2013. La jornada laboral anual aumenta en 20 horas, pero se consiguen los dos días de descanso semanal en rotación de cinco semanas y los 30 días naturales de vacaciones. Así mismo, se consigue también la ultratractividad del convenio, es decir, que éste seguirá en vigor hasta la aprobación del siguiente, rompiendo con la reforma laboral del gobierno en este punto.

Esta victoria es especialmente importante en el contexto actual de crisis capitalista, pues demuestra que aplicando los métodos de un sindicalismo combativo, tales como la huelga indefinida, negándose a aceptar la lógica del mercado y la aceptación de determinados ataques como un "mal menor", y basándose en el espíritu de lucha que se respira entre amplias capas, se puede lograr defender las condiciones de vida de la clase obrera y sentar precedente para otros sectores en lucha. ¡La lucha sí que sirve!

## Victoria de los trabajadores de CAF (Beasain)

### La movilización obliga a la empresa a paralizar el ERE a 869 trabajadores

Revista marxista **Euskal Herria Sozialista** ([www.euskalherriasozialista.net](http://www.euskalherriasozialista.net))

La empresa comunicó a los trabajadores el pasado 26 de noviembre su intención de presentar un ERE de suspensión en la planta situada en Beasain para 869 empleados, cada uno de los cuales se vería afectado entre 51 y 61 jornadas por esta medida, con un máximo de 350 personas al día. El objetivo de la empresa era repartir todavía más beneficios entre unos pocos a costa de atacar las condiciones laborales y los puestos de trabajo de la plantilla.

Los trabajadores a través de asambleas masivas rechazaron desde el principio esta medida y convocaron distintas movilizaciones, entre ellas diez jornadas de paros parciales de cuatro horas por turno en la factoría de Beasain, además de varias manifestaciones junto a los trabajadores de la planta de Irún. La respuesta de la dirección de CAF, demostrando que estaba dispuesta a llegar hasta el final, fue amenazar a los trabajadores con un cierre patronal y con meter a la Ertzaintza en la fábrica.

Pero los trabajadores continuaron la lucha. El 16 de diciembre la dirección de la planta llamó por teléfono a los representantes de los trabajadores y les convocó a una reunión para las 7:00h. de la mañana del día 17. En el encuentro, el director general de la empresa les leyó un comunicado en el que informaba de que la dirección dejaba sin efecto la tramitación del expediente de suspensión. La información transmitida por la dirección fue recibida con aplausos, gritos y abrazos por los 1.500 empleados congregados en el exterior, que esperaban con suma expectación noticias de la reunión. Su presencia allí se debía a que habían convocado una asamblea para concretar las protestas de esa semana. Los trabajadores habían conseguido un gran triunfo.

### Ni un solo retroceso en las condiciones laborales y salariales

Es verdad que las luchas no son fáciles, que las empresas van en serio y que los trabajadores se juegan mucho. Pero este ejemplo demuestra que las empresas no son omnipotentes, que los trabajadores te-

nemos fuerza, y que si la utilizamos bien se puede multiplicar. Los trabajadores de CAF han demostrado una tremenda capacidad de lucha, y una gran contundencia en la movilización. Este es el camino que hace posible parar los ataques. Pero también hay que tener claro que la empresa no cejará en su intento de empeorar las condiciones laborales. Por eso es necesario mantener la guardia.

Lo que más temen los capitalistas es, por un lado una lucha unitaria y, por otro, la máxima organización de la clase trabajadora. Por tanto, un paso importante sería trabajar por unificar y coordinar las luchas y conflictos de las diferentes fábricas del Goierri, creando una coordinadora de empresas en lucha para hacer frente con más fuerza a los mismos ataques que estamos



sufriendo los trabajadores en todas las empresas. Junto a esto, es fundamental implicar a la población de nuestros pueblos, barrios, polígonos, universidades y centros de estudio de todo Guipúzcoa y Euskal Herria.

También, y tal como se ha hecho correctamente con los trabajadores de Irún, es necesario buscar la coordinación y la unificación con el resto de los centros de producción de Lleida, Zaragoza, Elvira, Linares, Castejón y Suresnes, con los centros de mantenimiento de Bilbao, Barcelona, Vigo, Sevilla y Lisboa, y con las plantas de producción/montaje y mantenimiento que están al otro lado del Atlántico: Sacramento (EEUU), México DF, Sao Paulo y Buenos Aires.

La dirección de CAF seguirá moviendo ficha. Esta vez, ante la lucha ejemplar de los trabajadores, han tenido que retroceder en sus planes. Pero no hay que confiar en la "voluntad negociadora" con la que se está "presentando" ahora la empresa. Sólo es para ganar tiempo, para seguir maniobrando y confundir a la plantilla. Es necesario que los dirigentes sindicales no negocien ningún retroceso porque eso solo serviría para abrir el camino a más ataques, y que se basen en la fuerza y decisión que han demostrado los trabajadores, que han sido los verdaderos artífices de esta importante victoria, empujando al comité en todo momento a dar una respuesta contundente a la agresión empresarial.

Por último, si la empresa continúa en su ofensiva, los trabajadores tenemos una alternativa para garantizar los empleos y la viabilidad de la producción: la nacionalización de la empresa bajo el control de los trabajadores. Con una CAF pública controlada por los trabajadores se podrían garantizar las condiciones laborales y los puestos de trabajo, y los beneficios de la empresa no serían para unos pocos, sino para satisfacer necesidades sociales como las infraestructuras, el transporte, la sanidad y la educación pública.

### V Conferencia Sindical de EL MILITANTE (1 y 2 de diciembre) Las posiciones del marxismo revolucionario avanzan en el movimiento obrero



Con una participación de más de 140 trabajadores y sindicalistas de CCOO, UGT, CGT, CIG y LAB, abordamos en profundidad las perspectivas para la lucha de clases en el Estado español e internacionalmente, aportando las experiencias de numerosos sectores que están en lucha, y explicando en detalle el trabajo que día a día realizan los delegados obreros que apoyan las ideas del marxismo en fábricas, comités de empresa y secciones sindicales. ▶ Reportaje completo en [www.elmilitante.net](http://www.elmilitante.net).

# Manifiesto de la Coordinadora de trabajadores del sector público de Madrid

**D**urante los últimos meses el Sindicato de Estudiantes ha participado en diversas reuniones con Comités de Empresa, Juntas de Personal y trabajadores del sector público en Madrid. Dichas reuniones tienen por objetivo unificar los diversos conflictos y hacer frente de forma conjunta a los planes de ajuste del PP. Reproducimos a continuación el manifiesto aprobado en diciembre por dicha coordinadora.

Los trabajadores del Sector Público somos plenamente conscientes de la destrucción que están realizando los gobiernos de las conquistas sociales que con tanto esfuerzo los trabajadores fuimos consiguiendo a través de la lucha, y más concretamente de la agresión y desprestigio sufrido desde hace años por el Sector Público, que ahora se ve multiplicado por la Estafa/Crisis a la que estamos sometidos. La Sanidad, la Educación, las condiciones laborales y salariales de los trabajadores en general, y de los del Sector Público en particular, están en el punto de mira del gobierno de Rajoy y del de la Comunidad y Ayuntamiento de Madrid.

Mientras el Gobierno nos señala día sí y día también la necesidad de hacer sacrificios, aprueba medidas cada vez más salvajes que hundan a millones de personas en la miseria, se destinan cientos de miles de millones para salvar a los bancos, continúan los desahucios contra miles de familias trabajadoras, etc. A la vez que se anuncian recortes cada vez más sangrantes, el Gobierno del PP, por citar solo un ejemplo, ofrece a los inversores del llamado "banco malo" privilegios fiscales hasta el punto de que van a tributar como las SICAV, un 1%. Este gobierno legisla en exclusivo beneficio de los banqueros y los empresarios, los auténticos responsables de la crisis que sufrimos. (...) que nos están haciendo retroceder a las condiciones de vida y de trabajo de principios del siglo XX.

El 31 de octubre el Gobierno de la Comunidad anunciaba una brutal ofensiva contra la Sanidad pública madrileña (...) Pero este es tan sólo otro episodio de una cascada de medidas contra los trabajadores en general y los servicios sociales en particular.



Mientras a los trabajadores nos reducen el salario, nos quitan la paga extra, nos incrementan las horas de trabajo y nos suben los impuestos, a los grandes empresarios se les ofrecen todas las facilidades para que sigan engordando sus ya de por sí repletos bolsillos. Por ejemplo, el Gobierno de Madrid ha anunciado que rebajará la tasa sobre el juego del 45% al 10%, junto con otra serie de privilegios fiscales, de cara a satisfacer al magnate del juego Sheldon Adelson para que traiga Eurovegas a Madrid. ¡Sí hay dinero, pero para los banqueros, los especuladores y los empresarios!

## Para unificar las luchas contra los que nos agreden

La privatización de la educación, la sanidad, el transporte público y los servicios sociales tiene un objetivo muy claro. De lo que se trata es de transformar estos servicios básicos en una fuente de beneficios jugosos, y envolverlos en papel de regalo a los empresarios para que los exploten. Sus intenciones son claras: ¡Quien quiera estudiar, quien quiera acceder a la asistencia sanitaria, quien quiera transporte y demás servicios, que los pague a precio de oro!

Pero existe una forma de frenar estas agresiones y derrotar sus planes: **la lucha organizada, unificada y contundente**. Los trabajadores hemos demostrado disposición a defender nuestro presente y el futuro de nuestros hijos en numerosas ocasiones,

la última, la huelga general del 14 de noviembre, en la que millones de trabajadores, estudiantes, desempleados, paralizamos el país y tomamos las calles en una gran demostración de fuerza. (...) Podemos parar estas agresiones, pero esto solo es posible si luchamos de forma masiva, contundente y todos los sectores unidos.

Los trabajadoras y trabajadores públicos, miembros de Comités de Empresa y Juntas de Personal de los distintos organismos públicos y otros colectivos sociales dentro de la Comunidad de Madrid, nos hemos reunido y hemos convocado ya manifestaciones y movilizaciones, con el firme convencimiento de la necesidad de organizarnos para coordinar las luchas para la defensa de un Servicio Público justo y de calidad (...). Asimismo nos comprometemos a luchar sin descanso hasta que consigamos recuperar todos los derechos perdidos y cambiar la política manipuladora e interesada llevada a cabo en los últimos años en la función pública.

Para ello los colectivos que inicialmente formamos parte de esta Coordinadora estamos trabajando para extender la integración de los Comités y Juntas de Personal de toda la Comunidad hasta conseguir la totalidad de los mismos, o al menos de la mayoría, en consecuencia os invitamos a que os integréis en esta Coordinadora y participéis en la **próxima reunión que se celebrará el 21 de enero a las 18:00 horas en la Avenida Ciudad de Barcelona 10, local**

del comité de empresa de Renfe, única manera de que las luchas se puedan unificar hasta lograr el éxito, y conseguir los siguientes objetivos:

- Contra los despidos, las subcontratas y las privatizaciones en el Sector Público.
- Derogación del RD 8/10 (devolución del 5%) y del RD 20/12 y el reintegro de todas las pagas.
- Anular la Reforma Constitucional que antepone el pago de la deuda a cualquier gasto de la Administración (pensiones, salarios, gasto en sanidad o en educación), ni un euro público al bolsillo de los banqueros; el dinero de todos, para defender nuestras condiciones de vida y los servicios sociales: Sanidad, Educación, Subsidios de Desempleo, Transporte; pero también para centros deportivos, para la limpieza viaria, mantenimiento de los parques, ayuda a la tercera edad.
- Derogación de las Reformas Laborales, que permiten el incumplimiento de la negociación colectiva, fomentan y abaratan los despidos, y de la Legislación Antisocial, como la Ley 15/97, que está permitiendo la privatización y el desmantelamiento de los servicios públicos.

- ▶ **¡En defensa de los empleados públicos!**
- ▶ **¡Retirada inmediata de todos los recortes y los planes privatizadores!**
- ▶ **¡Sí se puede! ¡Defendamos todos los servicios públicos!**
- ▶ **¡Juntos y organizados, actuando con contundencia podremos frenar los planes del PP!**
- ▶ **¡Por una huelga general en Madrid!**

Para contactar con nosotros:  
[serviciopublicosi@gmail.com](mailto:serviciopublicosi@gmail.com)

Comités de Empresa de EMT, Ayuntamiento de Madrid, Casa de la Moneda, Ayuntamiento de Rivas, Fundación Nuestra Señora del Camino, Junta de Personal Agencia Tributaria, Comité de Agencia para el Empleo y Sindicato de Estudiantes.

## Santiago Freire

**L**os días 4 y 5 de enero los trabajadores de Metro de Madrid llevaron a cabo una nueva huelga, esta vez de 48 horas. Esta movilización supone la continuación de las protestas que los trabajadores del suburbano vienen haciendo desde septiembre con la realización de múltiples paros parciales durante octubre, noviembre y diciembre, todos ellos al igual que esta huelga con un apoyo y seguimiento masivo.

Tras estas dos jornadas de huelga, los sindicatos de Metro han planteado paros parciales indefinidos a partir del 17 de enero y una manifestación el miércoles 23 (a las 18:00h., desde la Plaza de la Villa a Sol) junto a los trabajadores de autobuses de EMT.

### Incumplimiento del convenio

El motivo de estos paros es el reiterado incumplimiento por parte del gobierno de la Comunidad de su convenio colectivo, así como la continua pérdida de derechos sociales y laborales que han sufrido en 2012.

## Los trabajadores de Metro de Madrid siguen en lucha

Los sindicatos calculan que cada trabajador de Metro ha perdido el año pasado una media de 3.000 euros de salario como consecuencia de la eliminación de la paga extra de navidad y de otros recortes sufridos en el salario a percibir. También están sufriendo un empeoramiento de las condiciones para la jubilación parcial al tiempo que se ha eliminado la contratación de personal indefinido.

La respuesta que ha dado la Comunidad de Madrid ha sido doble. Por un lado, trata de criminalizar a los trabajadores y acusarles de tomar a los usuarios como rehenes, y por otra parte, establece unos servicios mínimos totalmente abusivos que, en la tarde del sábado 5 de enero con la excusa de la cabalgata de reyes, llegaron a ser del 125% en algunas líneas. Lo que no dicen es que el servicio de Metro, un medio de comunicación vital para los trabajadores, está sufriendo ya desde hace meses un importante

deterioro por la disminución de la frecuencia de paso de los trenes y por la subida abusiva de las tarifas. No son precisamente las protestas de los trabajadores las que están afectando a la calidad de los servicios públicos de Madrid, sino más bien las políticas deliberadas del gobierno del PP que con un absoluto desprecio hacia los madrileños no ve en esos servicios públicos más que una fuente de negocio con la que sus amigos empresarios puedan lucrarse.

### Endurecer y unificar las movilizaciones

Como muy bien dicen los compañeros de CCOO de Metro en la portada de su web: "quieren acabar con todo". Sí, y tienen la firme determinación de llevarlo a cabo. El PP intenta romper la huelga decretando unos servicios mínimos cuyo resultado real es el de prohibir, a un alto porcentaje de

la plantilla, este derecho fundamental que los trabajadores arrancaron a la dictadura franquista. Es necesario a este respecto decir basta. Debemos recordar que en junio de 2010 los trabajadores de metro pusieron contra las cuerdas al ejecutivo autonómico al convocar una huelga indefinida y negarse en aquella ocasión a cumplir los servicios mínimos pese a todas las amenazas del entonces gobierno de Esperanza Aguirre.

Por esa razón es necesaria una estrategia sindical que endurezca la lucha y aumente decisivamente su presión. Una campaña intensa y amplia de preparación, repartiendo propaganda al resto de trabajadores, organizando mítines en los barrios obreros, en las fábricas, serviría para poder neutralizar la inevitable campaña de criminalización que arrearía desde el PP y que sería seguida por los medios de comunicación, empezando por los más reaccionarios. Multitud de trabajadores de diferentes sectores están en lucha en Madrid y los que no lo están, simpatizan claramente con ellas. Las condiciones están dadas para pasar a la ofensiva, endureciendo esta justa lucha y uniéndola con el resto. Esta es la única forma de frenar al PP y sus recortes.

# Arcelor Mittal: un acuerdo lesivo para los trabajadores que revela la bancarrota del sindicalismo de pactos

Paco Ibáñez

Afiliado a CCOO en Arcelor Mittal (Asturias)

**T**ras la firma a principios del mes de diciembre del V Acuerdo Marco entre las direcciones sindicales y la empresa, se ha publicado en la prensa todo tipo de halagos y parabienes al mismo. Sin duda, para la empresa es un gran acuerdo pues se han aceptado todas y cada una de sus exigencias: desregulación de la jornada laboral, brutal reducción salarial, ampliación del ERE...

A cambio, las contrapartidas que se nos quieren vender no son tales: una "inversión" de 100 millones de euros, que se destinará al mantenimiento y que era una necesidad para la propia empresa si quería seguir con la producción, y 200 contratos relevo que se aplicarán al personal que ya está trabajando, pero a cambio de la pérdida de casi 500 contratos de eventuales. En cuanto a la reapertura del horno alto, es una decisión industrial que habrían llevado a cabo o no dependiendo de los pedidos que tengamos.

Para lo que sí ha servido este acuerdo es para marcar de forma clara el camino a seguir para el resto de la patronal. No tardaremos en comprobar los efectos en las compañías auxiliares; de momento, la dirección de ALCOA ya ha propuesto a la plantilla reducir los costes salariales un 7%, prorrogar el ERE en peores condiciones y, si no hay acuerdo, amenaza con el descuelgue del convenio. La firma de este acuerdo en Arcelor supone la representación gráfica de la total bancarrota del sindicalismo "responsable".

Este acuerdo se ha alcanzado además despreciando todo el potencial de lucha de

la plantilla, sin tener en cuenta la magnífica respuesta que dimos a la única jornada de huelga que se planteó, y renunciando a la plataforma que aprobamos los trabajadores en asamblea. Todos sabemos que una negociación que no se apoya en la presión está condenada al fracaso, y más aún en las actuales circunstancias. La empresa también sabe esto, así que presionó con el descuelgue del convenio y la no reapertura del horno alto. Frente a esto, la respuesta sindical fue aceptar todas las pretensiones de la compañía y renunciar a dar una batalla para preservar nuestras condiciones laborales.

## El referéndum, tal como se planteó, es un fraude

En primer lugar, un acuerdo que supone retrocesos tan graves debe someterse a la consideración de todos los trabajadores. Pero salvo en la factoría de Avilés, no se planteó en ninguna otra planta del grupo, ni siquiera en la factoría de Veriña. Es vergonzoso el doble rasero que han aplicado en esta ocasión UGT y USO, para aceptar el referéndum en Avilés y rechazarlo en Gijón. ¿Qué explicación creíble puede haber, salvo el temor de que en Veriña saliera rechazado?

El referéndum desde el primer momento nació muerto, no sólo porque no se realizó de forma general, sino porque ante la "oferta" de la empresa, no había ninguna contraoferta sindical y, por supuesto, ninguna alternativa de lucha. Lo realmente destacable teniendo en cuenta la escasa participación, de poco más del 50%, (no es de extrañar pues al no ser vinculante muchos dieron el acuerdo como hecho) es que, con todo en contra, casi 800 trabajadores vota-

ran *no*. De hecho, el *sí* arrasó en oficinas centrales (donde el porcentaje de personal de fuera de convenio es bastante elevado) y entre los jubilados (113 a favor y solo 9 en contra) mientras que el *no* ganó en instalaciones como baterías y en la acería, donde el peso del personal a turnos es determinante (213 por el *no* y 167 por el *sí*). Eso sin contar todo el personal de fuera de convenio que votó en las instalaciones, muchos de ellos brazos ejecutores de los planes de la empresa en cuanto a reducción de plantilla, ritmos de trabajo, absentismo laboral...

Y no hay que olvidar que estos resultados se consiguen tras desarrollar una vergonzosa campaña de miedo alentada por la empresa y respaldada por la dirección de la UGT, la cual en la hoja que distribuyó pronostica todos los males posibles en caso de que se rechace el acuerdo.

Hay que señalar que, desde el primer momento, CCOO se manifestó en contra del mismo, calificándolo como "desequilibrado para los trabajadores". Pero no basta con manifestar verbalmente ese desacuerdo. Ante una agresión de tal calibre era necesario desarrollar una activa campaña en contra. Y, lo más importante, presentar ante los trabajadores una plataforma alternativa y un plan de lucha contundente en caso del rechazo mayoritario al acuerdo, algo que no se ha hecho en ningún momento. De otra manera, se obliga a la plantilla a escoger entre la sartén y el fuego. Y eso es exactamente lo que han hecho los trabajadores.

Nadie puede pretender responsabilizar a la plantilla de los retrocesos que se nos van a imponer. Todo lo contrario. Estamos convencidos de que un referéndum en estos mis-



mos términos pero presentado por la empresa sin el respaldo de los sindicatos, hubiera sido ampliamente rechazado. La mayoría de los trabajadores han aceptado a regañadientes el acuerdo porque ha sido la única alternativa explícita o implícitamente que han puesto los sindicatos sobre la mesa.

¿Cuál hubiera sido el resultado, si en lugar de plantearse como se hizo, se hubiera votado tras un proceso de asambleas donde se debatiera el preacuerdo y las posibles alternativas y planes de lucha? En nuestra opinión, probablemente estaríamos hablando de un resultado bien distinto. De lo que no cabe ninguna duda es que con la actual política sindical de pactos y consensos sin ningún tipo de presión, en una situación de crisis prolongada del capitalismo como la que estamos viviendo, los trabajadores estamos condenados a retrocesos gravísimos en todos los frentes. Fortalecer una corriente revolucionaria en nuestros sindicatos de clase, para luchar por otro tipo de sindicalismo es una tarea de primer orden. ¡Únete a la Corriente Marxista Revolucionaria!

Albert Perer

**L**a mayoría del comité de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) —formada por CCOO, UGT y dos sindicatos corporativos— y la empresa, tras una reunión maratónica de 20 horas, llegaron a un preacuerdo en la madrugada del 28 de diciembre. El preacuerdo fue aceptado en referéndum por la plantilla (71% a favor y 29% en contra) el 3 de enero. De esta forma acaba una larga lucha, que empezó en octubre tras el anuncio de un ERE de 450 despidos, y que se ha expresado en paros parciales, de 24 horas y en una ocasión de 72 horas, y en manifestaciones continuas por el centro de Valencia y Alicante.

El acuerdo implica la reducción de los despidos a 310, de los cuales 74 serán de forma directa y 236 mediante prejubilación forzosa. Además, se recortarán los salarios un 10%. Al preacuerdo se han opuesto el Sindicato Independiente Ferroviario (SIF) y el Sindicato Ferroviario. El SIF considera que "la última asamblea de trabajadores celebrada el día 19 de diciembre" (se refiere a la última antes del preacuerdo, posteriormente hubo otra) "decidió por mayoría absoluta en sus dos sesiones, NO A LOS DESPIDOS TRAUMÁTICOS (...). El SIF decidió por unanimidad mantener la decisión de la asamblea de trabajadores y establecer que los despidos traumáticos debían ser CERO".

Los cuatro sindicatos firmantes hicieron una intensa campaña para convencer a los trabajadores de la bondad del acuerdo. En el blog del comité destacaron una carta del Gabinete de Asesoramiento de la Politécnica de Valencia, un grupo de econo-

## País Valenciano: acaba la lucha de FGV con un acuerdo de recorte salarial y de empleo



mistas de esta universidad, supuestamente independientes, que ha aconsejado a la parte sindical en la negociación. Su tesis era que "si el resultado fuera *no*, se le estaría dando carta blanca a la empresa. El despido de 450 personas al parecer sería automático (...). El rechazo de la plantilla reforzaría a la empresa, debilitando a los sindicatos y dividiendo a la plantilla". Además, no habría salida, porque "los tribunales no están acogiendo favorablemente la postura sindical de "no acepto ningún despido". Evidentemente, si la lucha contra un ERE dependiera exclusivamente de las posibilidades judiciales de echarlo atrás, las perspectivas para ella serían muy negras. Estos asesores universitarios, y (lo cual es mucho más grave) los dirigentes sindicales que se escudan en estos supuestos técnicos, desprecian la fuerza de la cla-

se obrera en acción, que no es un complemento para apuntalar una negociación, o una salida judicial, sino el punto clave que decide en un sentido u otro el resultado.

### Había fuerza para luchar contra todos los despidos

Muchos seguidistas de la mayoría del comité se han hecho eco en las últimas semanas, incluso antes del acuerdo, de calumnias contra los trabajadores, acusándoles de no estar a la altura de las circunstancias, de acudir cada vez menos a las manifestaciones. Muy al contrario, la plantilla ha respondido desde el primer momento como un solo hombre, demostrando una madurez muy superior a la de la mayoría del comité. Las continuas huelgas han sido seguidas al cien por cien, y el ambiente era de unidad y

fuerza pese a las limitaciones de la estrategia sindical. A partir de noviembre, en las asambleas los trabajadores asumían mayoritariamente la necesidad de endurecer la lucha (con huelgas incluso de una semana entera, sin aceptar los servicios mínimos), y de extenderla a la EMT, a RTVV, etc., cogiendo con las dos manos el ofrecimiento del Sindicat d'Estudiants en este sentido (rechazado desde el principio por los dirigentes de CCOO y del sindicato corporativo SCF). También exigían mayoritariamente el boicot a la negociación del ERE, como medida de fuerza para forzar su retirada. Todas estas propuestas fueron desoídas por la mayoría del comité, cortando así la posibilidad de que la lucha fuera a más.

Este acuerdo anticipa nuevos ataques, inmediatos. La víspera del referéndum se anunció el informe de la consultora Improven, pagada por la conselleria de Transports. El Plan de Saneamiento propone la privatización de una línea de tranvía de Alicante y del tren Alicante-Benidorm, la venta de tres estaciones de Alicante y cinco de Valencia, y el aumento de tarifas hasta un 20% en Alicante (en Valencia subieron hasta un 50% en septiembre).

Como en el reciente caso de la lucha de la EMT valenciana, esta experiencia tiene que ayudar para impulsar un sindicalismo combativo con una perspectiva revolucionaria, dentro de los sindicatos de clase. El voto negativo de 435 trabajadores demuestra que existe una base fuerte para ello.

# 5, 6 y 7 de febrero

## HUELGA GENERAL ESTUDIANTIL



★ **La educación pública en peligro**

★ **¡Hay que parar la ley Wert y los recortes!**

**Tohil Delgado**  
Secretario gral. del Sindicato de Estudiantes

En el escaso año que lleva en el gobierno el Partido Popular las condiciones de vida de jóvenes y trabajadores se han visto fuertemente deterioradas por sus constantes ataques y recortes. Una de las conquistas sociales con la que el PP quiere acabar lo más pronto posible es la educación pública. Siguiendo el ejemplo de Esperanza Aguirre en Madrid, que de un curso a otro despidió a miles de profesores, desde el Ministerio de Educación han cogido con las dos manos este ejemplo y lo han exportado al conjunto del estado, encontrándonos este año con 50.000 docentes menos dentro de la escuela pública en sus diferentes etapas educativas.

### Un modelo de escuela franquista

Pero el PP no sólo quiere acabar con la calidad educativa masificando nuestras aulas, acabando con los desdobles, laboratorios y aulas de refuerzo, sino que también pretende llevar adelante una contrarreforma educativa que nos devuelva al modelo de la escuela franquista que tuvieron que soportar nuestros padres: recuperando las reválidas (auténticos exámenes de selectividad) en 4º de la ESO, 2º de Bachillerato y antes de entrar en la universidad; imponiendo itinerarios segregadores y clasistas que nos separen en dos grupos: “los que valen” y “los que tienen que ir a la FP”, además de crear un tercer itinerario desde los 15 años que, tras dos años de estudio, nos entregará un título equivalente al que tendríamos si hubiéramos dejado la escuela en 3º de la ESO; convirtiéndonos en mano de obra sin apenas cualificación para ser explotados a placer en cualquier puesto de trabajo. La última de las medidas a destacar, entre otros muchos aspectos profundamente negativos de la nueva contrarreforma que la derecha pretende aprobar en febrero, es la imposición de una nueva figura de director que, en la práctica, se convertirá en un títere del Gobierno dentro de los centros de estudio para

que su política se aplique con determinación y se pueda sancionar a quienes nos opongamos a ella.

### Fortalecimiento de la asignatura de religión

Por si estas medidas no dejaran claro que no es ninguna exageración hablar de una vuelta a la escuela de los años 60, José Ignacio Wert, ministro de Educación, anunció que iban a incluirse algunas modificaciones sobre el último borrador de anteproyecto, entre las que se encontraban: volver a convertir en evaluable la asignatura de religión católica para que así la nota obtenida pueda contar en el expediente académico —creando una asignatura alternativa también evaluable y presumiblemente con contenidos que requieran una mayor dedicación y esfuerzo de los estudiantes que quieran obtener notas similares a las repartidas en las clases de religión, incentivando por tanto la “elección” de religión sobre su alternativa—, mejorar las condiciones para la concertación de escuelas privadas, es decir nuevas facilidades y desvío de fondos públicos para aquellos que entienden la educación como un negocio y no como un derecho fundamental. Y, por último, la intención de acabar con el derecho a que los estudiantes catalanes, gallegos y vascos puedan estudiar y aprender con garantías dentro de la escuela pública sus respectivas lenguas maternas. A esta escandalosa batería de nuevos ataques habría que sumar la voluntad de Wert de acabar con el derecho a huelga de los estudiantes de Bachillerato, FP de Grado Medio y secundaria.

### La derecha quiere eliminar derechos fundamentales

Esta enorme regresión en el sistema educativo, y especialmente los últimos anuncios a incluir en la contrarreforma educativa, no han sido discutidos ni con padres ni con profesores y mucho menos con los estudiantes. El PP sólo ha tenido tiempo y oídos para la patronal educativa y para la Conferencia Episcopal, de

ahí que todas y cada una de las medidas que incluye esta nueva ley sólo beneficien a estos dos sectores, y pasen por encima del conjunto de la comunidad educativa.

En cuanto a la eliminación del derecho a huelga para los estudiantes de secundaria, porque según el PP somos menores e inmaduros, aunque no parece preocuparle tanto que con 16 años cualquier joven pueda ser explotado en la hostelería por 4, 5 o 6 euros la hora hasta altas horas de la madrugada, o que con su nueva contrarreforma tan pronto como a los 14 años de edad sea necesario elegir un itinerario académico que, o bien nos abrirá las puertas a luchar por acceder al Bachillerato, la Universidad o la FP de Grado Superior, o nos desviará a una FP de Grado Medio masificada, sin medios y que nos empuja a un mercado laboral lleno de paro juvenil. Para todo esto somos mayores y estamos preparados; sin embargo, para el PP, con 17 años un joven no tiene criterio para decidir si quiere acudir a una manifestación de la Marea Verde contra el despido de 50.000 docentes y el recorte de 4.000 millones de euros a la escuela pública. La intención del PP no es otra que recortar nuestros derechos democráticos, algo que entra en completa sintonía con esos mismos dirigentes del PP que cada vez que tienen ocasión dicen que habría que limitar el número de manifestaciones o “regular” el derecho a huelga del conjunto de los trabajadores.

### ¡Sí podemos!

Los jóvenes y trabajadores sufrimos las medidas de este gobierno que sólo sirven para que una minoría nade en la abundancia. Para ellos no hay recortes, no hay desahucios, no hay despidos. Por eso cada día más personas se suman a la lucha, a la protesta contra unas medidas claramente injustas. Wert cada vez que habla deja ver su actitud autoritaria y antidemocrática desoyendo el rechazo a su política educativa por la inmensa mayoría de padres, profesores y estudiantes.

PASA A LA PÁGINA 11

**Únete a la corriente marxista agrupada en el periódico obrero EL MILITANTE y lucha con nosotros por una alternativa socialista:**

- Reducción de la jornada laboral a 35 horas sin reducción salarial. Contra el desempleo: reparto del trabajo.
- Jubilación a los 60 años con el 100% del salario con contratos de relevo, manteniendo la estabilidad en el empleo.
- No a la precariedad laboral. Fijo a los quince días. Por trabajo periódico, contratos de fijos discontinuos.
- Salario Mínimo de 1.100 euros al mes a partir de los 16 años.
- No a la reforma laboral.
- Defensa de la empresa pública. No a las privatizaciones. Planes de inversión y renovación tecnológica que garanticen todos los puestos de trabajo.
- No a la discriminación de la mujer trabajadora. A igual trabajo, igual salario.
- Defensa de la sanidad pública. No a la privatización.
- Por una red educativa pública, única, laica, gratuita, científica y de calidad. 7% del PIB para la educación pública.
- No a los recortes en el subsidio de desempleo.
- Un puesto de trabajo o subsidio de desempleo indefinido igual al SMI hasta encontrar trabajo.
- Vivienda digna. Nacionalización de las grandes empresas constructoras y municipalización del suelo urbano para acometer la construcción de un millón de viviendas sociales en los próximos cuatro años.
- Ninguna restricción en nuestros derechos de expresión, reunión y huelga. No a la Ley de Partidos.
- Por el derecho de autodeterminación de las nacionalidades históricas. Por una Federación Socialista de Nacionalidades Ibéricas.
- Depuración de los elementos reaccionarios del aparato del Estado. Control por parte de los sindicatos obreros de las academias militares y de policía.
- Ninguna discriminación en el empleo por edad, sexo o nacionalidad. Derogación de la Ley de Extranjería. Plenos derechos laborales y ciudadanos para los inmigrantes.
- Expropiación de las empresas que se declaren en quiebra o en suspensión de pagos, bajo control obrero.
- Nacionalización de la banca, la tierra y los monopolios sin indemnización, salvo en casos de necesidad comprobada, y bajo control obrero. De esta forma se podría planificar democráticamente la economía en beneficio de la mayoría de la sociedad.

## ¡Suscríbete! Apoya la prensa obrera



Edita: AC El Militante • DL: M-14564-1989

Envía tus datos y un Giro Postal al Apartado de Correos 5.200, 28080 Madrid o comunícale con nosotros a través del formulario de suscripción que aparece en nuestra web

**Suscripción anual ▶ 11 números**

	Normal	Ayuda
Estado español	23 €	35 €
Resto del mundo	35 €	47 €

**Suscríbete**

- ➔ Recibe El Militante en tu casa
- ➔ Apoya la prensa obrera

### CONTACTA CON NOSOTROS

<b>ANDALUCÍA</b>		
• Cádiz	678 940 435	
• Granada	616 893 592	
• Málaga	952 276 563	
• Sevilla	619 745 685	
<b>ARAGÓN</b>		
• Zaragoza	697 338 376	
<b>ASTURIAS</b>	985 550 933	
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>		
• Guadalajara	949 201 025	
• Puertollano	650 837 265	
• Toledo	699 956 847	
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>		
• Salamanca	653 699 755	
<b>CATALUNYA</b>		
• Barcelona	933 248 325	
• Girona	657 212 367	
• Tarragona	660 721 075	
<b>EUSKAL HERRIA</b>		
• Álava	945 231 202	
• Guipúzcoa	625 707 798	
• Pamplona	635 919 738	
• Vizcaya	656 714 818	
<b>GALICIA</b>		
• Compostela	679 500 266	
• Coruña	600 810 516	
• Ferrol	626 746 950	
• Vigo	636 217 248	
<b>MADRID</b>	914 280 397	
<b>PAÍS VALENCIA</b>	961 339 120	

[www.elmilitante.net](http://www.elmilitante.net) • [elmilitante@elmilitante.net](mailto:elmilitante@elmilitante.net)